

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CON
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL**

**"EL DEBIDO PROCESO EN LA JURISDICCIÓN PENAL DE
ADOLESCENTES"**

**POR:
ADRIÁN JESÚS CASTILLO ESTRIBI**

**TESIS PRESENTADA COMO UNO DE LOS REQUISITOS PARA OPTAR AL
GRADO DE MAESTRÍA EN DERECHO CON ESPECIALIZACIÓN EN
DERECHO PROCESAL.**

2008

DEDICATORIA

*A mi esposa Rosa y mis hijos Adrián Ricardo y Lizzie
Sofía, quienes constituyen fuente de inspiración inagotable.*

AGRADECIMIENTO

En primer lugar a ti "OH DIOS PADRE ETERNO" de bondad y misericordia.

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento al Profesor Ángel Gómez, por haber dirigido esta investigación.

A todos aquellos que de una u otra forma nos alentaron en esta nueva experiencia académica.

INDICE GENERAL

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
INDICE GENERAL	iv
RESUMEN	viii
SUMMARY.....	ix
INTRODUCCION	x
CAPITULO PRIMERO: EL PROBLEMA DE INVESTIGACION	1
1.1 Antecedentes	2
1.2 Planteamiento del Problema	3
1.3 Justificación	4
1.4 Delimitación del Problema	5
1.5 Objetivos.....	6
1.5.1 Objetivo General.....	6
1.5.2 Objetivos Específicos.....	6
1.6 Hipótesis	7
1.7 Limitaciones.....	8
1.8 Proyecciones.....	8
CAPITULO SEGUNDO: MARCO TEORICO.....	9
2.1 Aspectos Generales.....	10

2.2	Antecedentes	11
2.3	Concepto	13
2.4	Regulación Internacional.	18
2.4.1	Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre	18
2.4.2	Declaración Universal de los Derechos Humanos....	19
2.4.3	Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.....	20
2.4.4	Convención Americana Sobre Derechos Humanos ..	23
2.5	Regulación Nacional.....	25
2.5.1	Constitución Nacional	25
2.5.2	Código Judicial	30
2.5.3	Jurisprudencia	32
2.6	Elementos Integrantes del Debido Proceso.....	33
2.6.1	Derecho a Ser Oído	33
2.6.2	Tribunal Competente, Predeterminado por la Ley, Independiente e Imparcial	34
2.6.3	La Contradicción y Bilateralidad	34
2.6.4	Derecho a Aportar Pruebas y a Contradecirlas.....	34
2.6.5	Derecho a Impugnar las Resoluciones.....	35
2.6.6	El Respeto de la Cosa Juzgada	35
2.6.7	Derecho a no Declarar Contra Si Mismo.....	35

2.6.8	Derecho a Ser Asistido por un Defensor	35
2.6.9	Derecho a no ser Investigado, ni Sancionado por Hechos que no sean Tipificados como Delitos	36
2.7	El Proceso Penal de Adolescentes.	36
2.7.1	Instrumentos Internacionales que Guardan Relación con el Proceso Penal de Adolescentes.	37
2.8	Legislación Nacional	45
2.8.1	Cuestiones Previas	45
2.8.2	Ley 40 de 1999	48
2.9	El Principio de Contradicción.....	62
2.9.1	Concepto	63
2.10	Participación de la Víctima	66
2.10.1	Fase de Investigación.....	72
2.10.2	Fase de Calificación del Proceso.	77
2.10.3	Etapas de Juzgamiento	80
2.10.4	Medios de Impugnación.....	82
2.11	El Fiscal Especial de Adolescentes.....	83
2.12	Legislación Comparada	86
2.12.1	República Dominicana	86
2.12.2	Costa Rica.....	87
2.12.3	El Salvador	89
CAPITULO TERCERO: MARCO METODOLOGICO		93

3.1	Tipo de Investigación.....	94
3.2	Fuentes de Información	94
3.2.1	Fuentes Materiales	94
3.2.2	Fuentes Personales	95
3.2.3	Instrumentos	95
3.3	Operacionalización de Variables.....	95
3.3.1	Definición Conceptual del Principio de Contradicción.....	95
3.3.2	Definición Operacional.....	96
3.4	Población y Muestra	98
3.4.1	Población Meta	98
3.4.2	Muestra Invitada	98
3.5	Instrumentos	99
3.5.1	Encuestas	99
3.6	Tratamiento de la Información.....	99
CAPITULO CUARTO: ANALISIS DE RESULTADOS		100
4.1	Presentación de Resultados	101
CONCLUSIONES.....		152
RECOMENDACIONES.....		157
BIBLIOGRAFIA		160
ANEXO.....		166

RESUMEN

Esta investigación jurídica de tipo descriptiva, tiene su origen al implementarse en Panamá el proceso penal de adolescentes, el cual ha sido estructurado bajo la consideración que los menores de edad en edades comprendidas entre los catorce y diecisiete años, son personas capaces de adquirir derechos y responder penalmente.

Este sistema garantista ha sido percibido por un gran sector de la población panameña, como muy favorable al adolescente frente al resto de los actores procesales, lo que ha determinado la necesidad de establecer si la legislación existente en nuestro país en cuanto al proceso penal de adolescente, es respetuosa del principio de contradicción en las diversas fases del proceso.

A efectos del desarrollo del trabajo de investigación se recurrió al examen de opiniones vertidas expertos de la materia tanto a nivel nacional e internacional, el examen de normas constitucionales, internacionales, legales y a conceptos jurisprudenciales.

Finalizado el trabajo de investigación concluimos que la actual estructuración del proceso penal de adolescentes en Panamá, establece un cúmulo de garantías a favor de los adolescentes y limita la posibilidad tanto del ministerio público y de la víctima de contradecir determinados actos procesales, por lo que se requiere una pronta modificación legal.

SUMMARY

This kind of descriptive legal research, has its origins in Panama to put the criminal process of adolescents, which has been structured under consideration that minors between the ages of fourteen and seventeen years, people are able to acquire rights and respond criminally.

This system guarantees has been perceived by a large sector of the Panamanian population, as very favourable to the teenager from the rest of the actors process, which has identified the need to establish whether the existing legislation in our country in terms of criminal prosecution of teen, Is respectful of the principle of contradiction in the various stages of the process.

For the purposes of development of the research work was appealed to the examination of expert views on the subject both nationally and internationally, the review of constitutional norms, international, legal and jurisprudential concepts.

After the research work we concluded that the current structure of the criminal proceedings of adolescents in Panama, provides a wealth of guarantees in favour of adolescents and limits the possibility of both the public prosecutor and the victim of certain acts contradict process, which requires a prompt legal amendment.

INTRODUCCION

El desarrollo que el tema de los derechos humanos ha ido teniendo dentro del ámbito internacional, ha motivado que dentro del Derecho Penal surjan corrientes de pensamientos que plantean la necesidad de introducir cambios en el sistema tradicional de represión del delito.

Estas corrientes de pensamiento no han quedado al margen del proceso penal de adolescentes, en el cual se ha dejado atrás el sistema tutelar, en el que los menores delincuentes eran considerados como objeto de protección del Estado.

Ante ello ha surgido la doctrina de la Protección Integral del Menor, bajo la égida del principio del Interés Superior del Menor, doctrina esta en la que se resalta la necesidad de reconocer al menor como persona, con capacidad y responsabilidad frente a sus actos, pero tomando siempre en cuenta su condición de personas en proceso evolutivo de desarrollo.

El reconocimiento del menor como sujeto de derecho, ha conllevado a su vez que dentro de la Justicia Penal de Adolescentes se estructure un modelo garantista, basado en el respeto de los diversos derechos y principios integrantes de la garantía del debido proceso, con la finalidad de asegurarle al adolescente, ya no una protección tutelar por parte del Estado, sino el efectivo ejercicio de los derechos que le asisten a los adultos en el proceso penal ordinario,

además de los reconocidos en la Ley que regula la materia y en los diversos instrumentos internacionales.

En este sentido, debemos señalar que doctrinalmente existe unanimidad en que uno de los elementos integrantes de la garantía del debido proceso lo es el de contradicción o bilateralidad, mismo que es consecuencia directa del principio de igualdad y en virtud del cual todas las partes dentro de un proceso, tienen el derecho a tener iguales posibilidades de participar dentro del mismo y a contradecir u oponerse a lo que señala la parte contraria; por lo que no puede existir dentro del proceso, discriminación por razón de raza, sexo, nacionalidad, ideas políticas, etc.

Ahora bien, es importante señalar que todo proceso penal tiene su origen en razón del daño causado a bienes jurídicos protegidos, por lo que frente al adolescente al que se le imputa la comisión de un hecho punible vamos a encontrar al titular del bien jurídico afectado por la conducta desplegada por el adolescente.

Ante ello cabe preguntarse si dentro del modelo garantista bajo el cual se ha estructurado el proceso penal de adolescente, igualmente se consagra el elemento de contradicción o bilateralidad, en relación a todas las partes del proceso, sea víctima, Ministerio Público, Abogado Defensor, en las diversas etapas del mismo.

Lo anterior ha despertado en nosotros el interés por la realización del presente trabajo de investigación, aunado a la creciente labor jurisprudencial desarrollada por nuestro más alto tribunal de justicia al integrar al bloque de la constitucionalidad el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el cual es una clara manifestación de la garantía del debido proceso.

El trabajo de investigación ha sido estructurado en cuatro partes o capítulos. En el primero de ellos se abordará el problema de investigación, sus antecedentes, los objetivos, los aspectos generales del debido proceso, para lo cual se hará una breve referencia a sus antecedentes, su concepto, su regulación constitucional y legal, los principios que lo integran y jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia.

En la segunda parte se hará un análisis de los principales instrumentos internacionales que guardan relación con el proceso penal de adolescentes y en los que existen claras manifestaciones de la garantía del debido proceso, tales como: La Convención de los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, Las Directrices de Riad y las Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

Posteriormente nos adentraremos en el análisis de la Ley 40 de 1999, modificada por la Ley 46 del 2003, la cual viene a regular el proceso penal de adolescentes en Panamá.

Producto del análisis de la Ley en referencia se extraerán, principios y derechos que están consagrados en la misma y que son manifestaciones de la garantía del debido proceso.

Posteriormente se expondrán los resultados del trabajo de investigación, producto de las encuestas efectuadas y el análisis porcentual del muestreo.

Finalmente se expondrán algunas conclusiones y recomendaciones, que son el resultado del presente trabajo investigativo.

Luego de realizado presente trabajo de investigación, esperamos haber cumplido la finalidad propuesta la cual es dar a conocer la vigencia del principio del debido proceso dentro del proceso penal de adolescentes, a fin de que todos los estudiosos del derecho y todos aquellos que de una u otra forma participamos dentro del proceso de administrar justicia, nos compenetremos con la necesidad de mantener y garantizar su vigencia.

CAPITULO PRIMERO: EL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1 Antecedentes

El desarrollo que el tema de los derechos humanos ha ido teniendo dentro del ámbito internacional, ha motivado que dentro del Derecho Penal surjan nuevas corrientes de pensamientos que plantean la necesidad de introducir cambios en el sistema tradicional de represión del delito.

Estas corrientes de pensamiento no han quedado al margen del proceso penal de adolescentes, en el cual se ha dejado atrás el sistema tutelar, en el que los menores delincuentes eran considerados como objeto de protección del Estado.

Ante ello ha surgido la doctrina de la Protección Integral del Menor, bajo la égida del principio del Interés Superior del Menor, doctrina esta en la que se resalta la necesidad de reconocer al menor como persona, con capacidad y responsabilidad frente a sus actos, pero tomando siempre en cuenta su condición de persona en proceso evolutivo de desarrollo.

El reconocimiento del menor como sujeto de derecho, ha conllevado a su vez que dentro de la Justicia Penal de Adolescentes se estructure un modelo garantista, basado en el respeto de los diversos derechos y principios integrantes de la garantía del debido proceso, con la finalidad de asegurarle al adolescente, ya no una protección

tutelar por parte del Estado, sino el efectivo ejercicio de los derechos que le asisten a los adultos en el proceso penal ordinario, además de los reconocidos en la Ley que regula la materia y en los diversos instrumentos internacionales.

1.2 Planteamiento del Problema

Con la finalidad de lograr el respeto de los derechos de los adolescentes que vulneran las normas penales, se ha establecido en nuestro país un sistema especial para investigar, juzgar, sancionar y velar por el cumplimiento de las sanciones impuestas a los mismos, el cual se encuentra estructurado sobre la base del respeto del principio del debido proceso.

En esta línea de ideas en los últimos años se ha observado un incremento en cuanto al número de casos penales en los cuales se ven involucrados a adolescentes como partícipes de hechos delictivos. Ante ello, se hace necesario determinar si dentro del proceso penal de adolescentes encuentra plena vigencia el Principio de Contradicción, como una de las manifestaciones de la Garantía del Debido Proceso.

El problema planteado debe ser abordado mediante el estudio de la normativa vigente en la materia y contrastarla, con las opiniones vertidas por todas las partes que intervienen en tales tipos de procesos.

1.3 Justificación

El creciente auge que en los últimos años ha adquirido nivel internacional, el respeto por los derechos que son innatos a la persona humana en cada uno de los diversos actos en los que participa el ser humano en el recorrido de su vida, ha llevado consigo el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento, que abogan por la creación de un sistema de justicia garantista y en el cual el respeto por las diversas garantías del procesado es el norte que las orienta.

Este nuevo sistema de justicia garantista, no ha quedado al margen de nuestro país, en el cual han surgido voces que claman por el respeto de las garantías procesales de todas aquellas personas que se vean sometidos a un proceso penal, así como de las personas que son víctimas de tales hechos. En tal sentido, la República de Panamá en la década de los noventa introduce cambios significativos en su legislación procesal penal interna, al punto de llegarse a establecer por vez primera la estructuración de un proceso penal, para aquel sector de la población que aún no haya cumplido los dieciocho años de edad y que infrinja las disposiciones penales vigentes.

El presente trabajo de investigación, tiene su origen al implementarse en nuestro país el proceso penal de adolescentes, el cual ha llevado consigo la creación dentro del Órgano Judicial y del

Ministerio Público, de entes especializados para la tramitación de tales tipos de procesos y en los cuales ha de considerarse al adolescente, como persona en proceso evolutivo de desarrollo, capaz de adquirir derechos y responder penalmente por sus actos, y en el cual la garantía del debido proceso constituye un pilar fundamental.

Es precisamente lo anterior, lo que ha determinado la elaboración del presente trabajo de investigación, pues consideramos necesario establecer si la legislación existente en nuestro país en cuanto al proceso penal de adolescente, es respetuosa del principio de contradicción en las diversas fases del proceso.

1.4 Delimitación del Problema

La investigación por lo extenso del tema, está dirigida al estudio del Principio de Contradicción, como una de las manifestaciones de la Garantía del Debido Proceso dentro del Proceso Penal de adolescente en nuestro país, el cual se desarrolla a través de la Ley 40 de 1999 y de otras leyes que han introducidos cambios en la misma.

Dentro del referido contexto se hará un análisis de las normas de esta ley, de los instrumentos internacionales que rigen en la materia y a criterios doctrinales.

Dentro de la investigación no se hará distinciones en cuanto a delitos en los cuales participen adolescentes, ni distinción de sexo, ni a edades.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General.

La presente investigación tiene por objetivo general: Establecer si en la actualidad dentro de la normativa que en materia penal de adolescentes rige en la República de Panamá, mantiene vigencia el Principio de Contradicción, como manifestación de la garantía del Debido Proceso.

1.5.2 Objetivos Específicos

Como objetivos específicos de la presente investigación podemos mencionar:

- Revisar el marco constitucional y legal de la garantía del debido proceso.
- Establecer los criterios doctrinales que existen sobre el principio de contradicción como manifestación de la garantía del debido en el proceso penal de adolescentes.
- Establecer que manifestaciones del debido proceso se establecen en la legislación vigente.

- Establecer la percepción que sobre el respeto de la garantía de debido proceso existe en los que participan dentro del proceso penal de adolescente.

1.6 Hipótesis

Dentro de la Jurisdicción Penal de Adolescentes, no encuentra plena vigencia el Principio de Contradicción, como manifestación del Debido Proceso.-

La hipótesis de trabajo conduce a la búsqueda de respuesta a las siguientes preguntas de investigación:

¿Qué elementos integran la garantía del debido proceso?

¿Cuáles son los instrumentos legales que en Panamá garantizan el respeto de la garantía del debido proceso dentro del proceso penal de adolescentes?

¿Qué instrumentos internacionales han sido ratificados por la República de Panamá, con el fin de garantizar el respeto de la garantía del debido proceso en la jurisdicción penal de adolescentes?

¿Cuál es la concepción doctrinaria sobre la aplicación de la garantía del debido proceso en la jurisdicción penal de menores de edad?

¿Qué oportunidades tienen las partes dentro del proceso penal de adolescentes panameño de contradecir u oponerse a lo que dice la parte contraria?

¿Cuáles es la percepción de las diversas partes que intervienen en el proceso penal de adolescentes sobre la igualdad de oportunidades que tienen en las diversas etapas del proceso?

1.7 Limitaciones

Para la elaboración del presente trabajo investigativo, se ha detectado una serie de dificultades que pasamos ha enunciar:

- La reciente implementación del proceso penal de adolescentes en nuestro país.
- La escasez de bibliografía nacional sobre el tema.

1.8 Proyecciones

Con la elaboración del presente trabajo de investigación se espera aportar un estudio analítico de la principio de contradicción como manifestación de la garantía del debido proceso dentro del proceso penal de adolescentes panameño, y destacar la importancia que reviste la vigencia del mismo dentro de este tipo de proceso.

CAPITULO SEGUNDO: MARCO TEORICO

2.1 Aspectos Generales

Desde el punto de vista de los derechos humanos, que entiende ha estos como aquellos derechos que son inherentes al hombre por su propia naturaleza, ya que son anteriores a la existencia del Estado, que no los otorga ni concede , sino que solo se limita a reconocerlos, sin ningún tipo de discriminación social, económica, religiosa, cultural, sexual, etc., a nivel doctrinal hay autores que han señalado el bien conocido principio del debido proceso representa un verdadero derecho que es connatural a la persona humana, o sea un derecho humano, de allí su consideración como garantía fundamental.

Esta línea de pensamiento ha sido mantenida por grandes procesalistas tales como EDUARDO J COUTURE y PIERO CALAMANDREI, quienes al referirse al debido proceso lo han conceptualizado como un derecho fundamental de la persona humana.

Ahora bien, es imperioso señalar que si bien dentro de los diversos Instrumentos Internacionales ha sido incorporada la garantía del debido proceso como un derecho que tiene todo ser humano, la vigencia del mismo esta supeditada a existencia de un proceso legal.

Desde esta perspectiva se aborda el presente trabajo de investigación, pero haciendo especial referencia al principio de contradicción o bilateralidad como manifestación del debido proceso,

con especial atención a su vigencia y respeto para con todas las partes que participan dentro del proceso penal de adolescentes en la República de Panamá.

2.2 Antecedentes

Partiendo desde la documentación, el debido proceso fue contemplado por primera vez en un documento en LA CARTA MAGNA del año 1215 en Inglaterra, con el Rey Juan, conocido como JUAN SIN TIERRA, quien para garantizar la lealtad y el apoyo financiero de los nobles les reconoce una serie de derechos y libertades, o sea una serie de derechos fundamentales que incluía principios de justicia, entre otros derechos (políticos, de propiedad, etc.).

Es así que uno de estos principios de justicia es el del debido proceso. De esta manera se establecía que ningún hombre libre podía ser tomado o encarcelado, o sus tierras usurpadas, declarado fuera de la ley, o exiliado, o de manera alguna destruido, ni cargar ni mandar sobre él, excepto por juicio legal de sus iguales o en virtud de la ley del lugar.

En 1628 las garantías antes mencionadas fueron confirmadas en Inglaterra por CARLOS I, en el documento PETITION OF RIGHT, incorporándose además el procedimiento para demandar a la corona inglesa.

En los Estados Unidos de Norteamérica, la DECLARACION DEL PUEBLO DE VIRGINIA DE 1776, redactada por THOMAS JEFFERSON, que proclamaba la independencia del referido país, llegó a consagrar como uno de sus principios fundamentales el debido proceso.

Posteriormente en Francia, en 1789 es proclamada la DECLARACION FRANCESA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, por medio de la cual se postulan principios básicos de igualdad y libertad. De esta manera aparece por primera vez el principio de presunción de inocencia, estableciéndose además que nadie podrá ser acusado, arrestado o detenido, sino en los casos expresamente determinados por la ley y con las garantías debidas, permitiéndose la detención preventiva de un ciudadano bajo un control jurisdiccional.

Ante este recorrido se da un letargo en lo que se refiere a aportes relevantes al debido proceso hasta 1948.

Es así que la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, promulgada el 10 de diciembre de 1948, en París por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consagra determinados derechos llegando a proclamar la igualdad ante la ley, de la siguiente manera:

"ARTICULO 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal."

Vemos pues, que el reconocimiento del debido proceso se dio desde el inicio de la documentación de los derechos humanos, motivando en los actuales momentos su transnacionalidad como derecho de la primera generación. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1994, pág.45.)

2.3 Concepto

A nivel Doctrinal, muchos han sido los autores que se han ocupado del estudio de esta garantía, entre los cuales podemos mencionar a Hernando Londoño Jiménez, quien nos indica: "Es tan amplio el concepto fundamental del debido proceso, que si quisiéramos analizarlo dentro de una extensa perspectiva jurídica, tendríamos que incluir en él buena parte de las normas integradoras del derecho procesal penal. Por eso siempre resultaría muy limitada e inconforme una definición que quisiera darse a lo que es debido proceso". (Londoño. 1989, pág.60).

Para el constitucionalista panameño y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos la garantía constitucional del debido proceso es “Una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso –legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas al proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos”. (Hoyos, 1996, pág.54)

Por su parte en el Modulo Instruccional Debido Proceso y Justicia Penal Garantista para la Adolescencia se indica respecto a esta institución: “Consecuentemente, debemos entender al tenor de lo expuesto, que el proceso debido es, por tanto, un derecho fundamental del sujeto, según el cual nadie será sancionado penalmente si previamente no se declara su responsabilidad penal en un juicio, seguido de acuerdo con las formalidades previstas en la Ley y con pleno respeto de los derechos que en el ordenamiento se

consagran a favor de tal persona.” (Órgano Judicial-Fondo De Las Naciones Unidas Para La Infancia., 2003, pág.10)

El Doctor Carlos Muños Pope al analizar el debido proceso manifiesta que: “En el ordenamiento jurídico patrio el proceso debido se traduce en el respeto obligado a una serie de presupuestos y formalidades que deben cumplirse antes de arribar a una decisión jurisdiccional, pues el proceso debido es el proceso conforme a lo estatuido en el ordenamiento procesal correspondiente que se integra también con otras disposiciones constitucionales y legales.”

Agrega que “el derecho al proceso debido o al debido proceso legal es el derecho fundamental más importante de que goza el sujeto en el proceso penal, al tiempo que constituye una forma importante de proteger al individuo y sus derechos del poder del Estado, que no podrá imponer alguna si no se observan las formalidades previstas en la legislación procesal correspondiente. (Muñoz Pope C, 1999, pág. 58)

Un concepto de mayor actualidad lo encontramos en la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 2 de julio de 1992, al expresar en cuanto a este término lo siguiente:

“El concepto y alcance del debido proceso como garantía constitucional es asegurar la efectiva vigencia de los derechos individuales reconocidos por las

Constitución Nacional, otorgando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurídica de dichos derechos por medio de un procedimiento legal previamente instituido donde se asegure la defensa en juicio, la bilateralidad de la audiencia y la igualdad de las partes en el proceso”.

En igual sentido en Sentencia del 27 de mayo de 1997, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, manifestó:

“ El debido proceso legal, implica una cuestión de orden instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido, la oportunidad razonable de ser oídas por un Tribunal Competente, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso, de contradecir las aportadas por la contraparte, y de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la Ley contra resoluciones judiciales, de manera que las personas puedan defender efectivamente su derechos ...” (Registro Judicial, 1997, p.23)

En esta misma línea de pensamiento y dentro de la concepción del Estado Social y Constitucional de Derecho, el procesalista Colombiano Aníbal Charry González, manifiesta: " El Debido Proceso más allá de ser una figura de carácter autónomo, es arco toral del Estado Social y Democrático de Derecho, que tiene como objeto basilar la protección de la dignidad humana, en la garantía del derecho a la defensa para que hayan decisiones judiciales que sean justas y socialmente útiles, como manifestación de justicia social en tanto valor que busca la igualdad o proporcionalidad, superando el concepto legal, indagándose de los criterios, principios o valores que sirvan como medida para decidir cuando resultan iguales verdaderamente las relaciones de los hombres entre sí respecto del Estado Social y Democrático al cual pertenecen." (González, 2006, pág.117.)

Conforme es recogida esta garantía dentro de la Constitución Nacional, podemos conceptualizarla como aquel derecho que tiene toda persona, cualquiera que sea su raza, sexo, nacionalidad, edad, credo religioso, a que dentro de un proceso penal, policivo o disciplinario, le sean garantizados y respetados sus derechos fundamentales, como el de ser oído, el de defensa, el contradictorio, a que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho, entre otros.

2.4 Regulación Internacional.

Dentro del marco del derecho internacional, diversos instrumentos que guardan relación directa con los derechos humanos hacen referencia a la garantía del debido proceso, siendo que la gran mayoría de estos han sido ratificados a través de Ley por la República de Panamá, pasando los mismos a formar parte del derecho interno, por lo que en la elaboración del presente trabajo de investigación consideramos importante examinar los principales instrumentos internacionales.

2.4.1 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

La misma fue aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana realizada, en Bogotá Colombia el 2 de mayo de 1948 y dentro de su articulado la misma consagra manifestaciones de la garantía del debido proceso.

En tal sentido el artículo XVIII, hace referencia al Derecho de justicia, expresando en tal sentido que: "Toda persona puede ocurrir a los Tribunales para hacer valer sus derechos. Así mismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".

Por otra parte el artículo XXVI, hace referencia al Derecho a Proceso Regular, indicando: "Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.

Toda persona acusada de un delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con las leyes preexistentes y a que no se imponga penas crueles, infamantes o inusitadas".

Se desprende de las diversas normas señaladas, manifestaciones claras de la garantía del debido proceso legal, tales como el derecho a ser oído, el derecho a ser juzgado por Tribunal Competente.

2.4.2 Declaración Universal de los Derechos Humanos

La misma fue adoptada dentro del seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 217 A del 10 de diciembre de 1948, e igualmente contiene manifestaciones de la garantía del debido proceso.

El artículo 10 de esta declaración establece de forma expresa:

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

2.4.3 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Este documento adoptado mediante Resolución 2200A de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue ratificado por la República de Panamá mediante la Ley Nº 15 del 28 de octubre de 1976, y recoge de forma más amplia la garantía del debido proceso en el artículo 14 al prescribir:

Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del Tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia, pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública,

excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”.

2. toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley.

3. Durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora y en idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presenten el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si carece de medios suficientes para pagarlo;

- e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
- f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
- g) A no ser obligada a declarar contra si misma ni a confesarse culpable.

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

7) Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

2.4.4 Convención Americana Sobre Derechos Humanos

Este Convención fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y aprobada por la Republica de Panamá mediante la Ley 15 del 28 de octubre de 1977.

En tal sentido es de interés mencionar que en el Capítulo II de la Parte I, dedicado a los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8, consagra las garantías judiciales, estableciendo a tales efectos:

Artículos 8

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones, de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su

culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

- a. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal,
- b. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
- c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
- d. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
- e. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por si mismo ni nombrase defensor dentro del plazo establecido por la ley;
- f. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

- g. Derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable, y
 - h. Derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior.
- 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
 - 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
 - 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

En relación a esta norma es conveniente mencionar, que nuestra Máxima Corporación de Justicia en reiterados fallos ha señalado que este Artículo integra un bloque de la Constitucionalidad,

2.5 Regulación Nacional

2.5.1 Constitución Nacional

Tal como ocurre en la justicia penal ordinaria, al abordar el estudio de la jurisdicción penal de adolescentes, se hace imperioso acudir al Texto Constitucional Patrio, el cual constituye el Cuerpo Jurídico Superior por excelencia y a nuestro juicio la piedra angular de todo Ordenamiento Jurídico.

A nivel jurisprudencial, se ha considerado en múltiples fallos que la garantía del debido proceso dentro de la Constitución de la República de Panamá, se encuentra recogida dentro del artículo 32 y que la misma viene a ser complementada por otros artículos tales como el 19, 21, 22, 31 y 215 (antes 212), por lo que dentro del desarrollo del presente trabajo de investigación es necesario examinar cada una de estas normas constitucionales.

En el tal sentido el artículo 32 de nuestra Constitución Política, establece:

ARTÍCULO 32: Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.

Del texto del artículo 32 se puede colegir que esta disposición contempla tres aspectos fundamentales a saber:

- Juzgamiento por tribunal competente.
- Cumplimiento de los procedimientos preestablecidos.
- Cosa juzgada o prohibición del doble juzgamiento.

Por su parte el artículo 19 del texto constitucional patrio nos indica:

"ARTICULO 19: No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas."

El artículo 21 establece como requisitos indispensables para la privación de libertad de una persona que la misma sea expedida por autoridad competente, previo cumplimiento de las formalidades legales y por hechos previamente definidos en la ley.

En esta línea de ideas el artículo 22, prescribe la obligación que tienen las autoridades de nuestro país de informar a las personas detenidas de las razones de su detención y de los derechos que le asisten. Igualmente alude esta norma al derecho de presunción de inocencia y al derecho de defensa.

El artículo 31 de nuestra Carta Fundamental por su parte consagra de forma expresa el principio de legalidad criminal, de conformidad al cual nadie puede ser sancionado por hechos no establecidos por ley como delitos y antes de su perpetración.

Igualmente el artículo 215 de la Constitución Política de Panamá, nos indica:

Artículo 215:" Las leyes procesales que se aprueben se inspirarán, entre otros en los siguientes principios:

1) Simplificación de trámites, economía procesal y ausencia de formalismos.

2) El Objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial.

En lo que atañe al proceso penal de adolescentes debemos indicar que a nivel constitucional el mismo encuentra sustento en el artículo 63, el cual indica en su último párrafo:

Artículo 63: (...)

La ley organizará y determinará el funcionamiento de la jurisdicción especial de menores la cual, entre otras funciones, conocerá sobre la investigación de la paternidad, el abandono de la familia y los problemas de conducta juvenil.

Es importante indicar que por su carácter especial, el proceso penal de adolescentes no puede concebirse con principios constitucionales distintos al de la jurisdicción penal de adultos, por lo que los concebidos para aquella jurisdicción son igualmente aplicables a esta jurisdicción especial.

Aunada a las disposiciones constitucionales señaladas y que guardan relación con el debido proceso, tenemos que mencionar el artículo 4, el cual expresa:

"ARTICULO 4. La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional."

La alusión a esta norma constitucional debe ser hecha, pues tal cual se menciona en apartados anteriores, existen diversos convenios internacionales, que han sido ratificados por la República de Panamá y que regulan de forma directa la figura del debido proceso y las diversas manifestaciones que la integran, por lo que a la luz de esta norma constitucional forman parte integrante de nuestro derecho interno y por tanto resultan de aplicación obligatoria.

En igual sentido el artículo 17 en su segundo párrafo nos indica que:

Artículo 17: (...)

Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.

Bajo esta perspectiva, debemos indicar que la garantía del debido proceso tal cual lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia, no puede ser limitada en nuestro país, al solo examen del artículo 32, y que la misma debe verse complementada con las otras normas constitucionales señaladas, así como con el desarrollo legal y jurisprudencial.

2.5.2 Código Judicial

El artículo 469 del Código Judicial indica en su parte final que ante la duda que surja en el juez al momento de proferir sentencia, deberá tomar en consideración los principios constitucionales y generales del derecho procesal, de manera que se observe el debido proceso.

El proceso penal de adultos encuentra su regulación actual dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico en el Código Judicial, específicamente en el Libro III, por lo que es dentro del mencionado libro en donde vamos a encontrar una serie de principios integrantes de la garantía del debido proceso, tales como el derecho a defensa, a la legalidad o tipicidad del hecho imputado, entre otros.

Es así que de los artículos 1941 al 1945 del referido cuerpo legal, se establecen los principios de presunción de inocencia, principio de legalidad criminal, el derecho a defensa, la prohibición del doble juzgamiento, entre otros.

Aunada a las normas anteriores el artículo 1950, prescribe que los procesos que se sigan en contravención a los artículos precedentes, serán sancionados con nulidad, atribuyendo responsabilidad civil y penal, a los jueces o funcionarios de instrucción que hayan participado en los mismos.

Es importante anotar, en tal sentido que mediante la Ley 63 del 28 de agosto del 2008, se promulga en nuestro país un nuevo Código Procesal Penal, el cual entrará a regir a partir del 2 de septiembre del 2009, el cual es concebido bajo la tendencia de un sistema acusatorio o adversarial, y en el cual los principios de inmediación, oralidad y debido proceso constituyen piedras angulares de sus estructura.

En tal sentido este nuevo Código Procesal Penal, nos indica en el artículo 3, lo siguiente:

Artículo 3. Principios del proceso. En el proceso se observan los principios del debido proceso, contradicción, inmediación, simplificación, eficacia, oralidad, publicidad, concentración, estricta igualdad de las partes, economía procesal, legalidad, Constitucionalización del proceso y derecho de defensa.

Esta nueva normativa, a nuestro criterio, trae repercusiones muy importantes en todo el sistema jurídico penal vigente en la República de Panamá, por cuanto que establece reglas de juego precisas y a las cuales deberán ceñirse los diversos actores procesales, siendo que igualmente deben tener repercusión en el proceso penal de adolescentes como se expondrá más adelante.

2.5.3 Jurisprudencia

Considerando la jurisprudencia como parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que en Panamá existe un bloque de la constitucionalidad, o sea normas que en conjunto con la Constitución, sirven para emitir un juicio de valor sobre la constitucionalidad de las leyes y otros actos de servidores públicos sujetos al control constitucional.

De esta manera se ha dado el reconocimiento del artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, lo que consideramos se debió en su mayor parte a la situación político social que vivía el país al inicio de la década de los noventa y en donde se requería de manifestaciones en pro del derecho como resguardo de la paz ciudadana.

Es así que se tiene el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 28 de septiembre de 1990, con relación al recurso de habeas corpus a favor de Gisela Vega Miranda en contra del Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, en el cual indica la Corte que las garantías que se prevén en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, constituyen un mínimo de protección a la persona humana, y por ende los Fiscales del Estado deben respetar en las indagatorias

que se practiquen las garantías que le otorga a los imputados el mismo.

Este criterio ha sido reiterado por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país en diversos fallos, tales como: el fallo del 8 de noviembre de 1990, el fallo del 19 de marzo de 1991, el fallo del 17 de octubre de 1997, el fallo del 18 de enero del 2000, el fallo del 19 de julio del 2000 y más recientemente en fallo del 10 de diciembre del 2003, por mencionar algunos.

2.6 Elementos Integrantes del Debido Proceso

En consecuencia de nuestro Derecho Nacional, ya a nivel Constitucional, legal y de la Jurisprudencia, podemos extraer determinados elementos que se encuentran presentes dentro de la garantía del debido proceso y los cuales pasamos a indicar.

2.6.1 Derecho a Ser Oído

Las personas tienen el derecho a ser escuchadas por el tribunal en que se ventila el proceso en el cual sean partes y ello antes de que el mismo dicte sentencia, por lo que se hace necesaria la notificación de estas a fin de que concurran al proceso.

2.6.2 Tribunal Competente, Predeterminado por la Ley, Independiente e Imparcial

Toda persona que actúa dentro de un proceso como parte activa del mismo, tiene derecho a que su causa sea conocida por un tribunal que conforme a la ley anterior al hecho que se debata sea competente para conocer el mismo. Además el referido tribunal debe ser independiente e imparcial, de forma tal que al emitir su resolución lo haga basado en derecho y en las pruebas incorporadas al proceso.

2.6.3 La Contradicción y Bilateralidad

Todas las personas que intervienen en un proceso tienen el derecho a tener iguales oportunidades de participar dentro del mismo, y a contradecir u oponerse a lo que señala la parte contraria. No puede existir dentro del proceso discriminación por razón de sexo, raza, ideas políticas o ideas religiosas.

2.6.4 Derecho a Aportar Pruebas y a Contradecirlas

Cada una de las personas que actúan dentro del proceso tiene el derecho a aportar las pruebas legales dentro de los términos de la ley, que respalden sus afirmaciones, y a su vez de contradecir aquellas que sean presentadas por la parte contraria.

2.6.5 Derecho a Impugnar las Resoluciones

Toda persona que interviene en un proceso tiene el derecho a disentir de la decisión proferida y por tanto a presentar los recursos que estime necesarios. Ello guarda especial importancia por lo señalado en el artículo 207 de la Constitución Nacional, el cual obliga a los jueces y magistrados inferiores a acatar las decisiones que dicten sus superiores al revocar o reformar sus resoluciones en virtud de los recursos legales instaurados.

2.6.6 El Respeto de la Cosa Juzgada

Ninguna persona puede ser juzgada más de una vez por la misma causa, por lo que si ello fuera así se estaría conculcando el debido proceso.

2.6.7 Derecho a no Declarar Contra Si Mismo

Ninguna persona puede ser obligada a declarar contra si mismo, ni a declararse culpable de un delito.

2.6.8 Derecho a Ser Asistido por un Defensor

Toda persona que participe dentro de un proceso tiene el derecho a la asistencia técnica de un abogado, ya sea particular o de oficio, a su elección y a mantener comunicación con él libre y privadamente.

2.6.9 Derecho a no ser Investigado, ni Sancionado por Hechos que no sean Tipificados como Delitos

Ninguna persona puede ser investigada o sancionada por hechos que al tiempo de su comisión no se encuentren tipificados en la ley penal como delito.

2.7 El Proceso Penal de Adolescentes.

En las ultimas décadas a nivel internacional, han surgido corrientes de pensamiento que han dado origen a cambios en cuanto a la forma tradicional en que los Estados venían analizado y tratando el tema de la delincuencia juvenil o de adolescentes, y las políticas criminales para este sector de la población.

Se formulan así, serias críticas a los sistemas tradicionales utilizados por los Estados para el tratamiento de los adolescentes que infringían normas penales, es decir cometían delitos. Se establece la necesidad de que el Estado vea ya a estos menores de edad no como objeto de protección sino como sujetos de derecho, capaces de adquirir derecho y de responder por sus actos.

Es así que, bajo la égida del principio de la protección integral del adolescente, se estructura un proceso de naturaleza penal en el cual aquellos adolescentes a los cuales se le acusa de haber cometido hechos delictivos, sean juzgados por una autoridad competente,

respetando todas aquellas garantías penales que le asisten a los imputados en el proceso penal de adultos, además de una serie de garantías especiales y teniendo presente que se trata de sujetos de derecho que se encuentran en periodo evolutivo de desarrollo.

En tal sentido, es dable indicar que estas corrientes de pensamiento igualmente encuentran respaldo a nivel de diversos organismos internacionales y son recogidos igualmente en instrumentos internacionales, documentándose así una serie de principios y postulados que dan una naturaleza especial a este tipo de procesos y los cuales se hacen imperiosos examinar en el presente trabajo de investigación.

2.7.1 Instrumentos Internacionales que Guardan Relación con el Proceso Penal de Adolescentes.

Antes de referirnos a la garantía del debido proceso dentro de la jurisdicción penal de adolescentes en el Derecho Panameño, se hace necesario abordar el estudio de los instrumentos internacionales, que dentro del marco de las Naciones Unidas han sido adoptados y los cuales han servido de marco de referencia a los Estados miembros para elaborar su legislación interna en esta materia.

En este sentido debemos indicar que fundamentalmente son cuatro los instrumentos internacionales que guardan relación con la

jurisdicción especial de responsabilidad penal de los adolescentes, a saber: La Convención Sobre los Derechos del Niño, Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil (Reglas de Beijing), Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), y las Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, instrumentos estos que igualmente forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y que mantienen carácter vinculante al haber sido ratificados por la República de Panamá, mediante mecanismo legislativo.

2.7.1.1 Convención Sobre los Derechos del Niño

Esta Convención, ha sido el resultado de años de lucha por el reconocimiento de los derechos de la infancia. La misma fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución N° 44/25, del 20 de noviembre de 1989, estableciéndose como fecha de entrada en vigencia el día 2 de septiembre de 1990, y fue ratificada por nuestro país mediante la Ley 15 del 6 de noviembre de 1990.

Se conjugan dentro de este documento internacional una serie de normas tendientes al reconocimiento y respeto de los derechos de los niños, entendiendo como tales a todo ser humano menor de

dieciocho años de edad, y cuya consideración primordial es el interés superior del niño.

El artículo 2 obliga a todos los Estados partes a respetar y asegurar los derechos de los niños, protegiendo a los mismos contra toda forma de discriminación.

En lo que respecta a la garantía del debido proceso esta Convención, contiene normas que reconocen a favor de los niños los derechos y principios integrantes de esta garantía, previendo que los adolescentes, en sentido general, sólo podrán ser investigados, procesados y sancionados por los hechos descritos expresamente como delitos por la ley penal vigente al tiempo de su comisión (art. 3).

Acorde con lo expuesto, el artículo 12 prevé el derecho que tienen los niños de ser oídos en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte, ya sea directamente o por medio de un representante u órgano apropiado, en consonancia con la legislación nacional.

Por otra parte el artículo 16 indica que ningún niño será objeto de ingerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques ilegales a su reputación, y que en contra de todos estos ataques o ingerencias tienen derecho a la protección de la ley.

Otras claras manifestaciones del debido proceso emergen del artículo 37, en el que se destaca:

- Que ningún niño puede ser privado de su libertad ilegal o arbitrariamente.
- El derecho que tienen los niños detenidos a estar en centros especiales distintos a los de los adultos.
- Derecho a tener asistencia jurídica u otra adecuada.
- Derecho a impugnar la privación de su libertad, ante Tribunal o Autoridad Competente, independiente e imparcial, y a tener pronta decisión sobre dicha acción.

En lo que respecta a materia penal esta Convención en el artículo 40 señala expresamente que a ningún niño se le podrá acusar o declarar culpable de haber infringido leyes penales por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron.

Del contenido de la norma antes citada, también se desprenden una serie de derechos que deberán ser garantizados a los niños en los casos en que se les acuse de la comisión de un delito, los cuales pasamos a detallar:

- Que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad
- Ser informado sin demora y directamente o por intermedio de sus padres o representantes legales, de los cargos que pesan en su contra.
- Disponer de asistencia jurídica o apropiada, en la preparación o presentación de su defensa.
- Que su causa sea dirimida, sin demora por autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, con la presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado.
- A no prestar testimonio o declararse culpable.
- A obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad.
- En caso que se considere que en efecto ha infringido leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, sea sometida a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial conforme a la ley.

- Contar con un intérprete en caso que no hable o entienda el idioma.

Todos estos principios y derechos son claras manifestaciones de la garantía del debido proceso y la convención los consagra como derechos mínimos a favor de los menores.

2.7.1.2 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing)

Estas reglas fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 40/33 del 28 de noviembre de 1985, y las mismas tienen claras manifestaciones de la garantía del debido proceso.

En este sentido es dable mencionar que la regla 7, preceptúa que en todas las etapas del proceso el menor tendrá garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho de asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos a interrogar a estos y el derecho de apelación ante autoridad superior.

Relacionado con lo anterior la regla 10.1, indica que cada vez que un menor sea detenido, la detención se notificará inmediatamente o en el menor plazo posible a sus padres o tutores.

En igual sentido la regla 15.1 reconoce el derecho del menor de recibir asesoramiento jurídico durante todo el proceso, ya sea particular o de oficio.

2.7.1.3 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad)

Estas directrices fueron adoptadas y proclamadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución N° 45/112, del 14 de diciembre de 1990.

Como su nombre lo indica las mismas tienen por objetivo principal establecer principios para evitar la delincuencia juvenil y destacan el respeto por el derecho de los adolescentes, resaltando la necesidad de que los gobiernos promulguen y apliquen leyes y procedimientos especiales, para proteger y fomentar el derecho de todos los jóvenes.

2.7.1.4 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad

Estas reglas que tienen por objetivo fundamental establecer normas mínimas aceptadas por Las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad en todas sus formas , compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad.

Las mismas fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución Nº 45/113, del 14 de diciembre de 1990, y al igual que los otros instrumentos internacionales, a los cuales hemos hecho referencia, se destaca el respeto por los derechos humanos de los menores.

Dentro de estas reglas se destaca el derecho a la presunción de inocencia (17), a la asistencia jurídica (18b), a tener centros especializados para el cumplimiento de las medidas que le sean impuestas a los menores (29).

2.8 Legislación Nacional

2.8.1 Cuestiones Previas

El régimen de responsabilidad penal para los adolescentes, propiamente tal viene a consagrarse en nuestro país con la aprobación y vigencia de la Ley 40 de 1999. No obstante, conviene precisar que la misma fue postergando su vigencia, estableciéndose una especie de *vacatio legis*, conforme a lo normado en la Ley 38 del 2000, la cual establece una prorroga para el nombramiento de las autoridades especializadas encargadas de participar dentro de este proceso penal especial.

Debido a las anteriores consideraciones y en atención a la publicidad dada a determinados hechos delictivos, se producen modificaciones a la referida Ley 40 de 1999, en el año 2003 al aprobarse y sancionarse la Ley 46 del 2003, y con la cual finalmente se pone en vigencia en todo el país la jurisdicción penal de adolescentes. Posteriormente, las Leyes 50 del 2005 y 15 del 2007, realizan otras modificaciones a la mencionada Ley 40 de 1999, las cuales para efecto del presente trabajo de investigación no serán objeto de análisis.

El régimen de responsabilidad penal de adolescentes, viene así a regular en nuestro país las conductas o acciones delictivas cuya

autoría o participación es atribuida al grupo de la población panameña comprendida entre los catorce años de edad y quienes no hayan cumplido los dieciocho años.

Este sistema viene a introducir cambios trascendentales en cuanto a la justicia penal de adolescentes en nuestro país. La misma en su concepción ideológica, parte del reconocimiento de la condición jurídica de persona que ostentan los menores de edad, incluyendo una serie de derechos y garantías previamente reconocidos en diversos instrumentos internacionales, y a los cuales ya se ha hecho referencia.

Entre los avances más notables que se ponen de presente en esta ley y tendientes al reconocimiento de un mínimo de garantías y derechos a favor de los adolescentes que hayan vulnerado normas que tipifican delitos, se encuentra la participación que se da al Ministerio Público, como único y exclusivo titular de la acción penal, en la investigación de los delitos, garantizándose así la imparcialidad e independencia de los juzgadores; principios estos que deben regir en todo proceso que se ventile dentro de un Estado que se considere de Derecho, al tenor de la garantía fundamental del debido proceso.

Esta ley viene a reconocer a los adolescentes la condición de Persona, y como tal los considera sujetos de derecho, con capacidad y

responsabilidad frente a aquellas situaciones en las cuales afecten bienes jurídicos de terceros y que son tutelados por la legislación penal ordinaria, pero teniendo presente que los mismos son individuos en proceso evolutivo en desarrollo.

La Magistrado ESMERALDA TROITIÑO, refiriéndose a este tema ha señalado:

“En el nuevo derecho de la infancia y la adolescencia llamado de PROTECCION INTEGRAL, se establece una consideración jurídico diferente, reconociéndole a este grupo humano como sujetos de derecho, como personas con capacidad y dignidad en la titularidad y en el ejercicio de sus derechos, transformando todas sus necesidades básicas en derechos humanos, exigibles en el ámbito de la protección tanto social como jurídica, con estricto respeto a los derechos y garantías fundamentales reconocidas para todas las personas también como derechos humanos, pero que por su condición de personas en proceso evolutivo de desarrollo evolutivo, estos revisten como un derecho reforzado o plus, brindando un tratamiento diferenciado, atendiendo las desigualdades.” (Troitiño, 2002, Pág.34).

En este sentido, se establece dentro de este régimen un tratamiento claramente diferenciador de los menores que cometen hechos tipificados como delitos, en relación a los adultos que cometen

tales hechos y que es revelador de una tendencia garantista, la cual es percibida por la población panameña como un exagerado proteccionismo a favor de este sector de la población delincuente.

Tanto ello es así, que en el anterior gobierno y en la actual campaña política hemos podido escuchar en los diversos medios de comunicación social, sobre voces que se levantan y claman por un endurecimiento de las penas a los adolescentes que cometieran hechos delictivos.

Ahora bien, dentro del presente trabajo investigativo, consideramos prudente examinar la Legislación de Responsabilidad Penal para la Adolescencia que rige en nuestro país, haciendo especial énfasis en la garantía del Debido Proceso y sus diversas manifestaciones, para posteriormente entrar al análisis del principio de contradicción y su vigencia dentro de este proceso penal especial.

2.8.2 Ley 40 de 1999

Al abordar el estudio de la Ley 40 de 1999, con todas sus modificaciones, debemos indicar que la misma teóricamente se encuentra construida bajo los cimientos de lo que se ha tendido en llamar dentro de la Doctrina como Protección Integral del Menor.

Tal como ocurre en el Proceso Penal de adultos, la Ley 40 de 1999, estructura el Proceso Penal de Adolescentes en tres fases o

etapas a saber: La Etapa Preliminar o de Investigación, La etapa de Calificación y La Etapa de Juzgamiento propiamente tal.

En cada una de las fases del Proceso Penal de Adolescentes, tanto el Fiscal Especial de Adolescentes como el Juzgador, deberán tener siempre presentes que la referida ley establece un sistema garantista, fundado en la doctrina de la protección integral del menor, misma que encuentra sus bases en los cuatro instrumentos internacionales ya analizados, y en los cuales se hace especial referencia a la garantía del debido proceso.

Seguidamente se procede a examinar algunos de los postulados básicos que establece la Ley bajo examen y que son de interés para el presente trabajo de investigación.

2.8.2.1 Principio de Especialidad.

La Ley 40 de 1999 supedita la actuación de las autoridades encargadas de participar dentro de la jurisdicción penal de adolescentes, no solo a la misma sino también a una serie de Instrumentos Internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia, Las Reglas de las Naciones Unidas para los Menores Privados de Libertad, y Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.

En tal sentido el artículo 3 de la citada Ley preceptúa:

ARTICULO 3. "Las autoridades e instituciones reguladas por la presente Ley , regirán su actuación por los principios y normas especiales consagrados aquí y en la Convención sobre los Derechos del Niño, en Las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de justicia, en las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad y en las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil".

Relacionada con la citada norma se encuentra el artículo 5 de la Ley en comento, el cual atendiendo al Interés Superior de la Niñez y Adolescencia, impone al Estado el deber de asegurar de forma prioritaria la realización de los derechos y garantías que consagra la Convención de los Derechos del Niño y ella misma.

Todos estos instrumentos internacionales, a los cuales hacen referencia las normas indicadas, contiene un mínimo de derechos a favor de los adolescentes y que son integrantes de la garantía del debido proceso, lo cual consecuentemente lleva consigo la obligación de juzgadores y funcionarios de instrucción, para que en cada una de las distintas etapas del proceso penal de adolescentes, se les garantice a los mismos el respeto de tales derechos y por ende un proceso justo.

La especialidad de la Jurisdicción Penal de Adolescentes, lleva igualmente una obligación para el Estado, tal cual lo establecen los dos últimos párrafos de la Ley en examen, como lo es el efectuar las asignaciones presupuestarias necesarias para que los adolescentes puedan ser Juzgados por las autoridades instituidas para ello y donde puedan defender sus intereses; de forma tal, que solo puedan ser sancionados en la forma, con los procedimientos y los fines de la mencionada ley.

2.8.2.2 Fines

Esta Ley presta especial atención a los derechos y garantías de los adolescentes a quienes se les atribuya la comisión de hechos señalados por la Ley Penal Panameña como delitos. En este sentido, de forma expresa se indica dentro de su normativa que persigue como fines inmediatos la educación del adolescente, la defensa social y la seguridad ciudadana, y la resocialización del menor que delinque.

2.8.2.3 Criterios Interpretativos

De conformidad al artículo 12 de esta Ley, la misma debe ser interpretada y aplicada con fundamento en la Convención de los Derechos del Niño y en atención a la normativa internacional en materia del menor, de forma que se le garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política, los Tratados,

Convenios, Pactos y demás instrumentos internacionales normativos, que hayan sido suscritos por la República de Panamá.

De la norma citada se desprende, que el juzgador y el funcionario de instrucción tienen, el deber de velar por el respeto de las garantías fundamentales de los adolescentes dentro del proceso penal, pero entendiendo que tales derechos no deben ser limitados a aquellos que son recogidos dentro del marco constitucional y legal panameño, sino también de aquellas garantías que son recogidas en los diversos instrumentos internacionales que hayan sido suscritos por nuestro país.

2.8.2.4 Derechos y Garantías de los Adolescentes

A diferencia de lo que ocurre en el actual proceso penal de adultos, en el cual no se concretan en un solo apartado los derechos y garantías que asisten a quienes se les imputa la comisión de un delito, la Ley 40 de 1999, dedica el Capítulo II del Título I a este trascendental tema.

En este orden de ideas se establece que en el Proceso Penal de Adolescentes, mantienen plena vigencia durante las fases de investigación, juzgamiento y de ejecución, todos los derechos y garantías que consagra la Constitución Política y las Leyes de la Jurisdicción Penal Ordinaria.

Adicionalmente se vuelve a hacer énfasis en la importancia de los instrumentos internacionales, al preceptuarse que se tomarán en consideración todos aquellos instrumentos internacionales que consagren derechos y garantías a favor de los detenidos, de los procesados y de los que cumplen una sanción debidamente impuesta (art.15).

Si se observa con detenimiento el artículo 15 de la mencionada Ley 40 de 1999, se podrá observar que una vez más se vuelve a reiterar la importancia que tiene el respeto de cada uno de los derechos y garantías del adolescente, en las diversas etapas del proceso.

Un aspecto a destacar dentro del texto de la referida Ley es la distinción que hace en cuanto a las Garantías Penales Especiales y Garantías Procesales Especiales, para lo cual se toma en consideración para las primeras la condición de adolescente como persona en desarrollo, y para la segunda las reglas del debido proceso.

2.8.2.5 Garantías Penales Especiales

Estas garantías son recogidas de forma expresa en el artículo 16 de la ley bajo estudio, las cuales sintetiza a través de veinte (20) principios.

Dada la importancia que tiene esta norma para el presente trabajo de investigación, se procederá al análisis de los mismos:

2.8.2.5.1 Respeto a la Dignidad Humana

Conforme al texto de la Ley, el mismo se traduce en el derecho que tienen los adolescentes a ser tratados con el respeto que se le debe a todo ser humano, incluyendo la protección a su dignidad, su integridad física y a la atención a las necesidades de una persona de su edad.

2.8.2.5.2 Igualdad y el Derecho a la no Discriminación

Ningún adolescente que es sometido a un proceso penal, debe ser objeto de discriminación por razón de sexo, raza, nacionalidad, etc.; y por el contrario debe garantizarle un trato igual.

2.8.2.5.3 Legalidad del Delito

El adolescente solo podrá ser investigado, procesado y sancionado por hechos calificados como delitos.

2.8.2.5.4 Respeto a la Libertad Corporal

La libertad y el ejercicio de los derechos de los adolescentes solo podrán ser limitados, de conformidad con los fines y procedimientos previstos en la Ley que regula la materia.

2.8.2.5.5 Ley Más Favorable

En los casos en lo que existan más de dos leyes aplicables, a un adolescente se le deberá aplicar aquella que le resulte más favorable.

2.8.2.5.6 Especialidad de Jurisdicción

Es el derecho que tienen los adolescentes a no ser investigados ni juzgados por autoridades distintas a las que establece la referida Ley. En este sentido, debemos señalar que en la actualidad no se cumple a cabalidad este principio, toda vez que es bien conocido que la labor de investigación de los delitos en los que se vincule a un adolescente, la lleva a cabo en el interior del país a excepción de Carriquí, Veraguas y Coclé las agencias ordinarias del Ministerio Público. Así mismo, no se han llegado a implementar en su totalidad los Juzgados Penales de Adolescentes, correspondiendo en algunos casos el conocimiento de tales causas a los Jueces de Niñez y Adolescencia.

2.8.2.5.7 Presunción de Inocencia

Solo la resolución que pone fin al proceso puede establecer la responsabilidad penal del adolescente con relación al hecho que se le imputa.

2.8.2.5.8 Prohibición de Doble Juzgamiento

Ningún adolescente podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho.

2.8.2.5.9 Protección a la Privacidad

Este principio se refiere a que cuando un adolescente sea investigado o procesado penalmente, su identidad e imagen, al igual que la de su familia no pueden ser divulgadas por los medios de comunicación.

2.8.2.5.10 Legalidad de Restricción de Derechos

Solo las autoridades establecidas en la Ley 40 de 1999, podrán ordenar limitar o restringir los derechos de los adolescentes.

2.8.2.5.11 Responsabilidad Penal y Capacidad de Culpabilidad

El Juez Penal de Adolescente al momento de decidir sobre la responsabilidad penal del adolescente deberá tomar en cuenta todas las circunstancias que afectan esa responsabilidad, en particular la capacidad de comprender la ilicitud del hecho delictivo cometido, así como la capacidad de determinarse conforme esa comprensión.

2.8.2.5.12 Lesividad

A los adolescentes no se les aplicará sanciones, sino con posterioridad a que se les compruebe en un juicio que su conducta dañó o puso en peligro un bien jurídicamente tutelado.

2.8.2.5.13 Legalidad de la Sanción

A los adolescentes solo se les podrá aplicar las sanciones y medidas cautelares que prevé esta ley.

2.8.2.5.14 Finalidad y Proporcionalidad de la Sanción

Las sanciones que se les impongan a los adolescentes deben ser conducentes a su resocialización y proporcional a los delitos cometidos.

2.8.2.5.15 Carácter Excepcional de la Privación de Libertad

Las medidas cautelares y las sanciones que constituyen privación de libertad, solo serán impuestas en los casos taxativamente contemplados en la ley, por el periodo más breve que sea posible y solo cuando no existan otras medidas viables.

2.8.2.5.16 Determinación de las Sanciones

A los adolescentes no se les podrá aplicar sanciones o medidas indeterminadas.

2.8.2.5.17 Carácter Especializado de los Centros de Cumplimiento.

En caso de de que resulte viable la limitación de la libertad personal de un adolescente, es necesario, que al mismo se le ubique en un centro de resocialización especializado y exclusivo para los adolescentes.

2.8.2.5.18 Pertenencia Familiar

Los adolescentes privados de libertad tienen derecho a mantener comunicación con su familia y a recibir las visitas de esta.

2.8.2.5.19 Carácter Integral o Interdisciplinario

A los adolescentes se les debe garantizar un tratamiento por un equipo interdisciplinario, en aspectos legales, sociales, etc.

2.8.2.5.20 Igualdad de Oportunidades

En aquellos casos de adolescentes con necesidades especiales, tienen el derecho que se les otorgue la atención necesaria para que no se encuentren en desventajas para reclamar y defender sus derechos.

2.8.2.6 Garantías Procesales Especiales

De conformidad al artículo 17 de la Ley 40 de 1999, a los adolescentes se les debe garantizar un tratamiento justo y una decisión expedita, de acuerdo con las reglas del debido proceso.

En tal sentido se señala que estas reglas, además de los derechos que se reconocen en la jurisdicción penal ordinaria, comprenden los siguientes derechos:

2.8.2.6.1 Derecho del Contradictorio Procesal

Es el derecho que tienen de ser oídos personalmente o por medio de un representante, según fuere su opción, por las autoridades que intervienen en la investigación y juzgamiento de los delitos que se le imputan.

2.8.2.6.2 Derecho a Ser Defendido por Abogado

Desde el inicio de la investigación hasta el cumplimiento de la sanción si la hubiere, los adolescentes tienen el derecho a ser defendidos en forma permanente por un abogado, el cual tendrá el derecho a fotocopiar el expediente para el uso exclusivo del caso.

2.8.2.6.3 Derecho a Ser Informados

Los adolescentes tienen el derecho a recibir de las autoridades judiciales que intervienen en el proceso penal de adolescentes, información clara y precisa de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia, así como del significado y las razones de las decisiones, de manera que se cumpla con la finalidad educativa del mismo.

2.8.2.6.4 Derecho de Defensa

En condiciones de igualdad y sin otra consideración que la defensa de sus derechos, los adolescentes podrán presentar todas las pruebas y argumentos necesarios para su defensa.

2.8.2.6.5 Derecho a Abstenerse de Declarar

Este derecho es un claro reflejo del artículo 25 de la Constitución Política de Panamá, en virtud del cual toda persona a la cual se le acusa de haber cometido un hecho delictivo, o a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, no se le puede obligar a declarar.

2.8.2.6.6 Derecho a la Confidenciabilidad

Las investigaciones que se sigan a los adolescentes son confidenciales, por lo que las autoridades no podrán proporcionar datos sobre la identidad del adolescente y del hecho que se investiga.

2.8.2.6.7 Derecho a la Búsqueda de la Conciliación

Consiste en que en cualquier fase del proceso y en lo casos en que proceda se tienda a llegar a un arreglo conciliatorio con el ofendido.

2.8.2.6.8 Derecho a la Presencia de los Padres en el Proceso

Los adolescentes pueden solicitar la presencia de sus padres o responsables en el proceso.

2.8.2.6.9 Prohibición de Juicio en Ausencia

Es el derecho que tienen a que en su ausencia no se dicte la resolución que ordena la apertura del juicio en su contra.

2.8.2.6.10 Derecho de Impugnación

Es el derecho que tienen los adolescentes de impugnar las Resoluciones que sean dictadas durante el proceso y a solicitar la revisión de las sanciones y medidas cautelares que se les impongan.

Al lado de estas garantías, se observan otras manifestaciones de la garantía del debido proceso⁰ en el artículo 37 de la Ley que rige la materia, al indicarse que todo adolescente que enfrente un proceso penal, tienen derecho a contar con los servicios de defensa de un profesional del derecho, ya sea particular o de oficio.

Por otro lado el artículo 43 prescribe que todo adolescente al cual se le atribuya la comisión de un delito, tiene derecho en todo momento a ser oído, a recibir explicaciones acerca de las medidas cautelares que se le impongan y a ser asistido y representado por un abogado.

Aparejado a lo anterior, el artículo 111 impone al Juez Penal de Adolescente imputado para que emita una manifestación sobre lo acontecido en la audiencia oral.

En igual sentido el artículo 82 reafirma el derecho que tiene el adolescente de abstenerse de declarar, sancionando con nulidad absoluta la violación de tal precepto y la correspondiente responsabilidad del funcionario infractor.

2.9 El Principio de Contradicción

Una vez examinadas los diversos derechos y garantías que consagra la Ley que regula el régimen de responsabilidad penal para la adolescencia en Panamá, en atención a los objetivos trazados en esta investigación es imperioso proceder al examen del principio de contradicción.

Como se ha señalado anteriormente la garantía del debido proceso es integrada por una serie de elementos, los cuales guardan relación directa con los intereses que la misma tutela, de forma tal que uno de ellos es el principio de contradicción o bilateralidad.

Ahora bien dentro del presente trabajo de investigación se ha hecho referencia a los principios y reglas que orientan o dirigen el Proceso Penal de Adolescentes, pudiéndose observar que a lo largo de la Ley 40 de 1999, se establecen garantías penales especiales y

procesales penales, las cuales son reconocidas a favor de los adolescentes a los cuales se le investiga, juzga o sanciona por hechos tipificados por la Ley como delito.

Frente a esto, cabe preguntarse si dentro del proceso penal de adolescentes se contemplan iguales posibilidades de participación en lo que atañe al proceso en si tanto por parte del Fiscal de Adolescentes como titular de la acción penal, así como para la víctima de aquellas conductas penales desarrolladas por adolescentes, y específicamente si se da la vigencia del principio de contradicción o bilateralidad.

2.9.1 Concepto

De conformidad con los planteamientos efectuados, y para comprensión del presente trabajo de investigación, se hace necesario llegar a una aproximación del concepto del principio de contradicción o bilateralidad, por lo cual es menester tomar como punto de referencia algunos conceptos doctrinales.

En este sentido el Doctor ARTURO HOYOS, refiriéndose a este principio nos señala: **"La bilateralidad de la audiencia no es más que un elemento de la garantía constitucional del debido proceso que es consecuencia del principio de igualdad ante la ley previsto en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Las partes en el proceso, pues, tienen iguales derechos y**

oportunidades para defenderse, lo cual excluye, según el artículo 19 de la Constitución Nacional, los fueros o privilegios personales o cualquier discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.”

Continua señalando, **“En cuanto a la contradicción, el proceso debe desarrollarse de tal forma, que cada una de las partes tenga oportunidad razonable de tomar posición de pronunciarse, de contradecir las afirmaciones, pretensiones o pruebas presentada por la contraparte...”** (Hoyos, op. Cit, p.69).

Por su parte Enrique Véscovi, citado por el Doctor Arturo Hoyos, señala:**“El principio de la bilateralidad de la audiencia, ante la petición de una parte debe oírse a la otra, para saber si la acepta o la contradice. El proceso en su avanzar, se desarrolla, entonces, mediante el sistema dialéctico de la contradicción”.** (Véscovi Enrique, En: Hoyos, ob.Cit. pág.69)

Nelson Delgado Peña, señala que el principio de contradicción es uno de los principios que caracteriza con más vehemencia el sistema acusatorio, pues la doctrina internacional, ha sido unánime al señalarla como el derecho de las partes de conocer y contradecir las pruebas allegadas al proceso. (Delgado Peña, 2005, pág.53)

En este mismo contexto el autor Gilberto Martínez Rave, refiriéndose a este principio nos indica: "Derecho de Contradicción: Que permite en el desarrollo del proceso que todos los sujetos procesales puedan controvertir las pruebas, argumentos o posiciones de los otros. Este derecho de contradicción se manifiesta tanto en la etapa de la instrucción como en la del juzgamiento. Se limita en la etapa de las diligencias preliminares o actuación previa en los casos excepcionales que contempla el Código. Se pretende que los diferentes sujetos procesales puedan no solo intervenir en la practica de las pruebas, sino que además puedan controvertirlas, oponerse a ellas, con el objeto de purificarlas." (Martínez Rave, 1992, pág.10-11)

Otro destacado autor que dedica un tratamiento especial al principio de contradicción lo es Hernando Londoño Jiménez, el cual indica: " En síntesis podríamos decir, entonces, que el principio de contradicción, a la luz del Código de procedimiento penal, incluye todas las normas e instituciones procesales que les garantizan a las partes un oportuno y eficaz ejercicio de sus funciones, concretadas estas a la desvirtuación probatoria de los hechos que afectan sus pretensiones, lo mismo que a la impugnación de tesis contrarias y providencias desfavorables. Forma parte, desde luego, del principio del debido proceso, queda inserto en el de la doble instancia y adquiere su mejor desarrollo y aplicación, con la lealtad procesal, la igualdad de las

partes y el derecho de defensa entre otros". (Londoño Jiménez,1998, pág.64)

Finalmente Fernando Velásquez Velásquez, señala : "Según este postulado, todo el trámite procesal esta presidido por la idea del debate, de controversia, de contradicción, de lucha de contrarios; el proceso no puede entenderse como un monologo del juez, sino como un dialogo abierto entre los diversos intervinientes en su calidad de partes, sujeto a acciones y reacciones, a ataques y contraataques; es un juego en el cual los contendientes armados de la razón luchan por el predominio de lo que creen es la verdad procesal. Por este motivo se lo ha denominado también como bilateralidad, de controversia o de carácter dialéctico del proceso." (Velásquez F En: Londoño Jiménez, H. op. cit. pág.64)

2.10 Participación de la Víctima

Tal cual se ha señalado anteriormente frente al adolescente que comete un hecho descrito por la ley penal como delito, se encuentra el titular del bien jurídico protegido y que ha sido vulnerado por la conducta ilícita desplegada por el adolescente, persona esta que a nivel de la jurisdicción penal ordinaria o de adultos es conocida como la persona ofendida o víctima y el titular de la acción penal, que viene a estar representado por el Fiscal Especial de Adolescentes.

Ante ello resulta imperioso referirnos al concepto de víctima que se da dentro de nuestra legislación, para lo cual debemos recurrir a la Ley 31 del 28 de mayo de 1998. En tal sentido, la mencionada Ley en el artículo 1 nos señala que personas se consideran víctimas de un delito, para lo cual se procede a transcribir el mismo.

"ARTICULO 1: Para los efectos de esta ley, se consideran víctimas del delito:

1. A la persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, incluidas las lesiones físicas o mentales, el sufrimiento emocional, la pérdida financiera o el menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acción u omisión que viole la legislación penal vigente.

2. Al representante legal o tutor de la persona directamente afectada por el delito en caso de incapacidad, al cónyuge, al conviviente en unión de hecho, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como al heredero testamentario cuando acuse la muerte del causante.

3. A las asociaciones reconocidas por el Estado, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con esos intereses.

Esta ley de igual forma, reconoce a las víctimas del delito una serie de derechos, los cuales guardan relación directa con el presente trabajo de investigación, pues algunos de los mismos vienen a

constituir claras manifestaciones del principio de contradicción, por lo que se hace necesario referirse a los mismos.

En tal sentido el artículo 2 de la mencionada ley señala como derechos de la víctimas:

1. Recibir atención médica de urgencia cuando la requiera, en los casos previstos por la Ley.
2. Intervenir sin mayores formalidades, como querellante en el proceso para exigir la responsabilidad penal del imputado y obtener la indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del delito.
3. Recibir eficaz protección de las autoridades públicas, por actos que atenten contra su integridad personal y la de su familia, en razón de la cooperación que brinden en cumplimiento de la Ley.
4. Ser considerada su seguridad personal y la de su familia, cuando el juez o el funcionario de instrucción deba decidir o fijar la cuantía de una fianza de excarcelación, u otorgar la concesión de una medida cautelar personal sustitutiva de la detención preventiva a favor del imputado.

5. Ser informada sobre el curso del proceso penal respectivo y, en particular, si este ha sido archivado, si puede ser reabierto y si es viable el ejercicio de la acción civil derivada del delito, independientemente que se intervenga como querellante.
6. Ser oída por el Juez, cuando este deba decidir sobre la solicitud de archivo del expediente presentada por el Ministerio Público, la suspensión condicional del proceso penal, la suspensión condicional de la ejecución de la penal el reemplazo de penas cortas de privación de libertad a favor del imputado.
7. Ser oída por el Órgano Ejecutivo, cuando este deba decidir sobre la rebaja de la pena o sobre la concesión de libertad condicional a favor del sancionado.
8. Recibir prontamente los bienes de su propiedad o de su legítima posesión decomisados como medio de prueba durante el proceso penal, cuando ya no sean necesarios para los fines del proceso.
9. Recibir patrocinio jurídico gratuito del Estado para coadyuvar con el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y para obtener la reparación del daño derivado del delito,

cuando no se tenga suficientes medios económicos de acuerdo con la Ley.

Además de los anteriores derechos el artículo 3 de la referida Ley indica que el querellante es sujeto esencial del proceso y, que como tal podrá ejercer todos los derechos reconocidos por la ley a las partes.

Efectuadas las anteriores consideraciones, se hace necesario pasar al examen de la participación de la persona ofendida o víctima dentro del proceso penal de adolescentes, en sus diversas etapas a fin de establecer cuales derechos y garantías se reconocen a tales personas, y consecuentemente si dentro de este proceso penal especial tiene plena vigencia el principio de contradicción o bilateralidad.

En este orden de ideas debemos indicar que la primera norma de la Ley 40 de 1999, modificada por la Ley 46 del 2003, que hace referencia a la participación de la víctima dentro del proceso penal de adolescentes es el artículo 46, el cual en el primer párrafo establece, que la persona ofendida o afectada por la comisión de un delito que se le impute a un adolescente participará directamente en la audiencia de conciliación y podrá ser llamada como testigo, para que declare en el proceso.

Se deduce de lo anterior, que la persona ofendida tiene participación primaria de testigo del hecho imputado al adolescente y que debe tener una participación activa dentro de la etapa de conciliación.

Adicionalmente se establece que la persona ofendida tiene el derecho a recibir orientación legal por parte del Ministerio Público, así como a nombrar apoderado judicial que represente sus intereses durante el proceso y colabore con el Ministerio Público.

No obstante, se establece que la designación de apoderado judicial dentro del proceso por la persona ofendida no le confiere a la misma la calidad de parte y que solo podrá interponer los recursos que la Ley le permite.

Por otra parte la Ley 40 de 1999, solo permite al apoderado judicial de la persona ofendida a intervenir en los supuestos previstos por la misma y de acuerdo a las formalidades que ella prevé.

Lo anterior, trae como consecuencia inmediata limitaciones en cuanto al actuar de la víctima en la defensa de sus intereses, dentro del proceso penal de adolescentes, pues de partida se le elimina la posibilidad de que puede adquirir la calidad de parte, aún cuando se le reconoce la posibilidad de que pueda nombrar un apoderado judicial.

Además de lo anterior, solo se le permite a la persona ofendida interponer aquellos recursos que la propia ley establece y actuar en supuestos determinados y cumpliendo con las formalidades que la ley prevé, lo cual igualmente limita su participación dentro del proceso penal de adolescentes.

Para una mayor claridad en cuanto a la participación que tienen las víctimas dentro de este proceso especial, consideramos pertinente examinar las diversas etapas en que se encuentra estructurado el mismo.

2.10.1 Fase de Investigación

La investigación dentro del proceso penal de adolescentes se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título III de la Ley 40 de 1999, modificada por la Ley 46 del 2003, el cual se compone de 10 artículos que van desde el artículo 77 al artículo 86.

Si se examinan estas disposiciones se podrá observar que dentro de las mismas, solo en el artículo 77 en el tercer y último párrafo se hace referencia a la persona ofendida, al indicarse que en los delitos de acción privada la investigación solo puede ser iniciada a solicitud de la persona ofendida.

No obstante, existen determinados actos que por mandato de la propia ley pueden darse dentro de la fase de investigación, tales como

la conciliación, la aplicación de medidas cautelares, la aplicación del principio de oportunidad, entre otros, por lo que es menester hacer referencia a tales actos en atención a los objetivos perseguidos con el presente trabajo de investigación y a los derechos que consagra la ley 31 de 1998 a favor de las víctimas de los delitos.

De conformidad al citado artículo 46 de la Ley que regula la materia en nuestro país, la persona afectada por un hecho delictivo cometido por un adolescente puede ser llamada a declarar como testigo, lo cual en la práctica ocurre dentro de la fase de investigación, siendo en la práctica las primeras personas en ser llamadas a declarar, pues son quienes más pistas pueden dar a las autoridades sobre el hecho delictivo cometido en su perjuicio.

En cuanto a las medidas cautelares se refiere, es importante indicar que el artículo 54 en su numeral 1 establece que entre los propósitos que justifican la adopción de una medida cautelar a un adolescente está el proteger a la víctima. Sin embargo, posteriormente el artículo 56 permite la sustitución, modificación y revocación de las medidas cautelares por parte del juez, sin que se le conceda a la persona ofendida oportunidad para pronunciarse en relación a tal solicitud, circunstancia esta que choca claramente con el principio de contradicción.

Otro de los actos que guardan relación con la investigación y en los cuales resulta interesante examinar la participación que tiene la persona ofendida vienen a ser las formas anticipadas de terminación del proceso, las cuales son reguladas en el Capítulo III del Título III de la citada Ley .

Son tres las formas anticipadas que contempla el proceso penal de adolescentes panameño para la conclusión del mismo, a saber: La Remisión, El Criterio de Oportunidad y La Conciliación.

2.10.1.1 La Remisión

En este caso el Juez Penal de Adolescentes, previa opinión del Fiscal, decide terminar el proceso y enviar el expediente al Juez de Niñez y Adolescencia para que este tome las medidas que procedan, lo cual deberá hacer a través de una resolución.

Es importante señalar que para que proceda la remisión, la propia ley establece cuatro supuestos:

- Cuando el adolescente al cual se le imputa la comisión de un delito no haya cumplido los catorce años de edad o el hecho delictivo hubiese sido cometido antes de que cumpliera los catorce años.

- Cuando el daño social sea leve y se detecte una situación grave de riesgo social que afecte al adolescente.
- Cuando detecte, o el estudio sicosocial le advierta, la ausencia de culpabilidad en el adolescente imputado, o su severa disminución.
- Cuando el estudio médico siquiátrico y sicosocial le adviertan la presencia de graves trastornos sicopáticos y sugieran la absoluta prioridad de tratamiento siquiátrico en beneficio del adolescente, la adolescente y la sociedad.

Para tomar tal decisión no se establece que sea necesario oír la opinión de la persona ofendida, no obstante, al tenor de lo normado en el artículo 120 de la Ley 40 de 1999, conceptuamos que la resolución que ordena la remisión es susceptible de ser apelada por el apoderado judicial de la persona ofendida, al tratarse de una resolución que pone fin al proceso.

2.10.1.2 Criterio de Oportunidad

Esta forma anticipada de terminación del proceso, es una facultad concedida al Fiscal de Adolescentes y en virtud de la cual el mismo puede abstenerse de ejercer la acción penal o de continuar con la investigación ya iniciada.

Son siete los supuestos contemplados en los cuales el Fiscal de Adolescente puede hacer uso del criterio de oportunidad, los cuales pasamos a señalar:

- Cuando los hechos investigados no constituyan delitos.
- Cuando resulte imposible la determinación del autor o autores del hecho punible.
- Cuando sea evidente que se actuó amparado en causa justificativa o de exculpación.
- Cuando el daño causado sea insignificante.
- Cuando el adolescente haya tenido escasa participación en el hecho punible
- Cuando la acción penal haya prescrito.
- Cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas en el acto de conciliación.

En este orden de ideas debemos indicar que el Fiscal de adolescentes para hacer uso del criterio de oportunidad deberá emitir una resolución motivada en la cual ordena el archivo del expediente; resolución esta, que conforme al artículo 68 de la citada Ley puede ser atacada por el apoderado legal de la persona ofendida mediante la

interposición de incidente de controversia ante el Juez Penal de Adolescentes.

Ahora bien, el citado artículo establece un término de diez días, contados a partir de la fecha en que el fiscal de adolescentes emite la resolución en la que decide no continuar con la investigación, para que la persona ofendida a través de apoderado judicial, pueda presentar el incidente de controversia; no obstante, no se establece como se pondrá en conocimiento de los involucrados tal resolución.

2.10.1.3 La Conciliación

Este acto puede tener lugar tanto en la fase de investigación como de juzgamiento propiamente tal, y es un acto voluntario entre la persona ofendida o su representante y el adolescente o la adolescente, que tiene como finalidad llegar a un acuerdo que ponga fin al proceso, y como acto voluntario se da oportunidad tanto al adolescente como a la persona ofendida para que expongan sus argumentos.

2.10.2 Fase de Calificación del Proceso.

Una vez el fiscal de Adolescentes remita la investigación, el Juez Penal de Adolescentes deberá fijar fecha para la audiencia calificatoria, la cual debe ser notificada a todas las partes, siendo de indicar que esta audiencia a de ser oral y en la misma harán uso de la palabra el fiscal, el querellante y el defensor hasta por un máximo de treinta

minutos, no obstante se señala que si no hay acusación el juez no podrá llamar a juicio.

Conforme al artículo 92 ni el auto de llamamiento a juicio ni el sobreseimiento, pueden ser recurridos.

No se concede a la persona ofendida la posibilidad de solicitar la reapertura de la investigación.

Se establece que a la persona ofendida se le podrá escuchar en la audiencia de conciliación.

2.10.2.1 Calificación del Proceso

El artículo 89 de la Ley 40 de 1999, modificada por la Ley 46 del 2003, establece de forma expresa la participación del querellante en el acto de audiencia oral hasta por un término máximo de treinta minutos. No obstante, este mismo artículo sujeta la dictación del auto de llamamiento a juicio a que exista acusación por parte del Fiscal de Adolescente.

En este mismo orden de ideas es importante anotar que conforme al artículo 92 de la mencionada ley, el auto de llamamiento a juicio siempre deberá ser notificado personalmente; en tanto, que el auto de sobreseimiento puede ser notificado personalmente o por

edicto en los estrados del tribunal, sin que llegue a establecerse en que supuestos se dará la notificación de una u otra forma.

Además la norma en mención establece en su primer párrafo que ambas resoluciones son irrecurribles.

2.10.2.2 Suspensión Condicional del Proceso

Tal cual acontece en el proceso penal de adultos, en el de adolescentes se permite la suspensión condicional del proceso, la cual puede ser decretada por el Juez Penal de Adolescentes, mediante resolución motivada, en los casos que reúnan las siguientes características:

- Que el hecho punible admita la conciliación.
- Que el adolescente haya realizado esfuerzos para reparar el daño causado, o el acto cometido no puso en grave peligro ni la integridad física de las personas, ni de sus bienes.

A este respecto debemos indicar que una vez el adolescente o la adolescente hayan cumplido con las condiciones impuestas en la resolución que decreta la suspensión condicional del proceso, el juez dictara una resolución en la que da por terminado el mismo y decreta su archivo.

2.10.3 Etapa de Juzgamiento

Dentro del proceso penal de adolescentes esta etapa procesal, viene a ser lo que en el proceso penal de adultos conocemos bajo la denominación de audiencia de fondo.

Esta audiencia es de tipo privada y en la misma deberán estar presentes el adolescente o la adolescente, su abogado, el fiscal y la representación de la persona ofendida, así como los testigos, peritos e interpretes, si hubiere necesidad de ellos.

Abierta la sesión el juez explicará al adolescente o a la adolescente el significado y la importancia del acto, así como los cargos que se le imputan, luego de lo cual el juez le preguntará si desea declarar (art.104); consagrándose a favor del mismo, el derecho de rendir las declaraciones voluntarias que estime necesaria durante todo el transcurso de la audiencia.

Posteriormente se procederá a recibir las pruebas de las partes, conforme al orden establecido en el Código Judicial, a menos que la naturaleza de las pruebas amerite un orden distinto (art.108).

Ahora bien debemos preguntarnos si la persona ofendida puede aducir pruebas, para ser practicadas en la audiencia de fondo, pues si se observa la redacción de la norma la misma solo hace referencia a las partes y conforme a esta propia Ley, la persona ofendida a pesar

que presente una querella no podrá ser considerada como parte en el proceso.

Finalizada la fase de práctica de pruebas, se procederá a la fase de alegatos (art.110), indicándose a tales efectos que el Juez ordenará a las partes presentar sus alegatos, siendo el fiscal de adolescentes quien lo hará en primer lugar y luego el defensor del adolescente.

De la redacción de la norma citada se desprende que la parte ofendida en el acto de audiencia de fondo, aun cuando haya designado apoderado legal no podrá presentar alegaciones.

Precisamente el artículo posterior, es decir el 111, hace referencia a las manifestaciones de las partes, al establecerse que luego de finalizado las alegaciones el juez concederá primero a la persona ofendida y, luego al adolescente o a la adolescente imputado, la oportunidad de emitir una manifestación sobre lo acontecido en la audiencia oral.

Otro aspecto a destacar es la notificación de la sentencia, al señalarse que la condenatoria será notificada personalmente en tanto que la absolutoria por edicto en los estrados del tribunal.

2.10.4 Medios de Impugnación

Son los medios a través de los cuales las partes que participan en un proceso pueden contradecir la totalidad o parte de una decisión adoptada por los tribunales de justicia.

En lo que respecta al Proceso Penal de Adolescentes son tres los recursos que se contemplan en contra de las resoluciones de primera instancia, a saber:

- El Recurso de Apelación que será decidido por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.
- El recurso de Casación que será decidido por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
- El Recurso de Revisión que será decidido por la Sala Segunda de Lo penal de la Corte Suprema de Justicia.

En lo que respecta al Recurso de Apelación se establece un catalogo de seis resoluciones que pueden ser apeladas.

En cuanto al recurso de Casación solo procede contra resoluciones que imponen sanciones privativas de libertad que excedan una duración de dos años y el de revisión solo por los motivos señalados en el Código Judicial.

Por otra parte conforme al artículo 120 tienen legitimidad para interponer los recursos establecidos en la citada ley el adolescente a través de su defensor y el fiscal de adolescente.

En cuanto a la persona ofendida prescribe la mencionada ley que la misma a través de su apoderado judicial, esta legitimada para apelar solamente de las resoluciones que le ponen fin al proceso y para recurrir en casación.

2.11 El Fiscal Especial de Adolescentes

A este actor procesal corresponde el ejercicio de la acción penal, destacándose el carácter especial del mismo. Su labor, tal cual ocurre en la actualidad en el proceso penal de adultos, esta dirigida a la instrucción de los sumarios seguidos a los menores de edad que se encuentren comprendidos entre las edades de 14 años y 17 años.

Corresponde entonces, tal cual se ha efectuado con el papel que juega la víctima, proceder al análisis de los diversas actuaciones que puede desempeñar este actor, ya no en la etapa de investigación, sino en la fase de calificación y juzgamiento.

En este orden de ideas precisa señalar que el artículo 92 de la citada ley 40 de 1999, establece la imposibilidad de recurrir en Apelación tanto el auto de llamamiento a juicio como el auto de sobreseimiento al señalar:

ARTÍCULO 92: El llamamiento a juicio será notificado personalmente o por edicto en los estrados del tribunal. Ambas resoluciones son inapelables.

...

De la norma transcrita se revela claramente la imposibilidad de apelar la resolución que dicte el juzgador, al momento de calificar el sumario, por tanto si el Fiscal de Adolescentes a solicitado en su escrito de acusación apertura a juicio y el juzgador estima que no hay lugar a ello, este actor procesal no podrá impugnar esta medida de conformidad a la norma citada.

Otro aspecto a destacar de la norma citada es que la misma solo hace referencia a sobreseimiento, por lo que debemos entender que ambos tipos de sobreseimientos están insertos en su contenido; siendo que esta norma, constituye una verdadera negación al principio de contradicción.

Otro punto a destacar es el referente al recurso de casación, que encuentra regulación en el artículo 118, que lleva el epígrafe Resoluciones susceptibles del recurso de casación, el cual consideramos importante reproducir:

ARTÍCULO 118: El recurso de casación sólo procede contra las resoluciones que imponen sanciones privativas de libertad que excedan una duración de dos años.

Si se analiza la norma transcrita, podremos observar que la misma solo permite el recurso de casación contra sentencias condenatorias, no así absolutorias, por lo que el al Fiscal Especial de Adolescentes le quedaría vedada la posibilidad de recurrir en casación cuando se trate de una sentencia de tipo absolutoria, a pesar de estar legitimado para interponer este tipo de recursos de conformidad con el artículo 120 de la mencionada ley.

Consideramos que esta norma igualmente riñe con el principio de contradicción, como manifestación de la garantía del debido proceso, colocando tanto a la Fiscalía como a la parte querellante en una situación de desventaja procesal en relación a la figura del defensor del adolescente.

A este respecto consideramos necesario hacer una reflexión sobre el objetivo del proceso penal de adolescentes, puesto que este excesivo grado de protección a nuestro juicio riñe con el mismo y con la normativa internacional que ha sido examinada.

La propia Ley 40 de 1999, establece cual es el objetivo del proceso penal de adolescentes en el artículo 42 al indicar:

“ARTÍCULO 42: El proceso penal de adolescentes tendrá como objetivo establecer la comisión del acto infractor, determinar quien es su autor y el grado de participación a que hubiere lugar, y ordenar la aplicación de las sanciones correspondientes.”

Si analizamos esta norma en conjunto con el resto de la normativa vigente en lo que se refiere a los principios que orientan al proceso, podremos observar que en ninguna de ellas se establece que a los adolescentes a los cuales se investigue y juzgue por supuesta comisión de hechos delictivos, deberá colocárseles en una posición procesal de ventaja sobre el resto de las partes, muy por el contrario se reafirma la necesidad de asegurarle la igualdad procesal, al igual que lo señalan los diversos instrumentos internacionales.

Es precisamente esta situación lo que ha motivado la elaboración del presente trabajo de investigación, y que nos conduce inexorablemente a proceder al examen de la legislación comparada.

2.12 Legislación Comparada

2.12.1 República Dominicana

La Ley 136-06, regula el procedimiento penal en la República Dominicana, específicamente en el título II del Libro Tercero. En este

sentido, el artículo 232 de esta Ley define lo que llama el principio de contradictoriedad del proceso, bajo los siguientes términos: "Los límites propios de la publicidad del proceso en la justicia especializada de niños, niñas y adolescentes no serán obstáculo para que se respete el principio de contradictoriedad, a tal efecto las partes tendrán todas las informaciones relativas al proceso, presentar los alegatos, ejercer los recursos y acciones contempladas en este Código"

Por otra parte los artículos 309 y 310 de la mencionada ley determinan la posibilidad que todas las partes constituidas en el proceso puedan aportar pruebas, interrogar y contrainterrogar. De igual forma, la posibilidad que tales actores procesales puedan presentar alegatos de conclusión.

2.12.2 Costa Rica

En nuestro vecino país de Costa Rica la Ley de Justicia Penal Juvenil 7576 del 6 de febrero de 1996, regula el proceso penal de adolescentes y tal cual ocurre en la República Dominicana, se destaca dentro de su normativa aspectos que dejan claramente evidenciado la vigencia del principio de contradicción, y un tratamiento un tanto diferenciador a lo regulado por el sistema jurídico panameño en esta materia.

A tales efectos consideramos conveniente mencionar, lo relacionado al papel de la víctima dentro del proceso, para lo cual reproducimos el texto del artículo 34 de la mencionada Ley:

ARTICULO 34.- El ofendido de conformidad con lo establecido en esta ley, la víctima, podrá participar en el proceso y podrá formular los recursos correspondientes cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses; podrá estar representada por sí mismo o por un abogado.

En este mismo orden de ideas los artículos 116 y 118 de la citada ley, refiriéndose al recurso de casación señalan:

ARTÍCULO 116.- Recurso de casación. El recurso de casación procede contra las resoluciones que terminen el proceso y contra las fijaciones ulteriores de la pena, siempre que el hecho no constituya una contravención.

ARTÍCULO 117.- Facultad para recurrir en casación penal. Sólo podrá interponer el recurso de casación el Ministerio Público, el menor de edad, su defensor y el ofendido, con patrocinio letrado.

Si se observan las normas transcritas, las mismas contienen una regulación distinta a la prevista en la Legislación panameña, por cuanto que no establece distinción entre el tipo de resolución contra la cual se puede recurrir en casación, la misma se limita a señalar que

deben tratarse de resoluciones que pongan fin al proceso y en las que se fije pena ulteriormente, excluyendo solamente las que guarden relación con contravenciones.

De igual manera, el artículo 117, otorga a todas las partes la posibilidad de recurrir en casación, sin establecerles limitaciones, con la sola indicación que el ofendido debe hacerlo a través de apoderado judicial, lo cual se entiende por la especialidad del recurso.

A ello, debemos señalar que esta redacción mantenida en nuestro hermano país de Costa Rica, consideramos es muy adecuada y en nada va en desmedro de las garantía y derechos de los adolescentes involucrados en los procesos y bien puede ser emulada en Panamá ante las futuras reformas que se hacen inminente.

2.12.3 El Salvador

En la República de El Salvador el Decreto Ley. N° 20, del 15 de junio del 2006, introdujo una serie de modificaciones al Decreto 863 del 27 de abril de 1994, el cual regula la jurisdicción penal de adolescentes en este país.

En tal sentido el artículo 22 del mencionado Decreto, establece el objeto del proceso penal de adolescentes bajo los siguientes términos:

Artículo 22.- El proceso de menores tiene por objeto establecer la existencia de una

infracción penal, determinar quien es su autor o partícipe y ordenar la aplicación de las medidas que correspondan.

En lo que respecta a la figura de la Víctima u ofendido, indica esta legislación:

Art. 51.- La persona directamente ofendida tendrá los siguientes derechos:

a) A ser informada de los resultados del procedimiento y de los posteriores a la resolución definitiva, independientemente que haya o no intervenido en los mismos;

b) A participar en la conciliación, el desistimiento y la vista de la causa, así como en cualquiera otra audiencia que afecte su interés, conforme a lo establecido en la presente ley;

c) A impugnar el sobreseimiento, la absolución o la cesación del proceso, aun cuando no haya intervenido en el procedimiento;

d) A que no se revele su identidad, ni la de sus familiares:

I. Cuando la víctima fuere menor de edad;

II. Cuando tal revelación implicare un peligro evidente para la misma; y

III. Cuando la víctima lo solicite.

e) A que se le brinden medidas de protección;
y,

f) A recibir asistencia médica o psicológica, cuando la necesite.

Iguales derechos tendrán el cónyuge o conviviente, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y el adoptante o adoptado del ofendido cuando la infracción haya provocado la muerte de éste.

Para el ejercicio de los derechos señalados en los literales b) y c) de este artículo, excepto en la conciliación, la víctima podrá designar mediante escrito que dirigirá al tribunal respectivo, un abogado para que la represente, sin perjuicio de que pueda hacerlo a través de mandatario. Además, la víctima podrá nombrar a una persona de su confianza en calidad de acompañante en todas las fases del proceso.

En cuanto a los medios de impugnación consideramos importante transcribir el contenido del artículo 103, del mencionado Decreto:

Artículo. 103.- El recurso de apelación especial procede contra las siguientes resoluciones dictadas por el Juez de menores:

- a) La definitiva;
- b) La que ordena la cesación del proceso;
- c) La que imponga o deniegue una medida en forma provisional;

- d) La que decreta una nulidad en la etapa preparatoria;
- e) La que ordene o deniegue la acumulación de procesos;
- f) La que imponga una multa por infracción a la presente ley;
- g) La que ordene que hay mérito o deniegue la celebración de la vista de la causa.
- h) La pronunciada con posterioridad a la resolución ejecutoriada que ponga fin al proceso; e
- i) Las demás señaladas en el Código Procesal Penal como apelables, cuando éstas fueren compatibles con el procedimiento y con las limitaciones de la presente Ley.

CAPITULO TERCERO: MARCO METODOLOGICO

3.1 Tipo de Investigación

Todo trabajo de investigación debe definir la modalidad de estudio que el mismo seguirá, para lo cual debe determinarse la información que se requiere para el mismo y el tipo de análisis que se efectuara, a efectos de facilitar la comprensión de la exposición de los resultados obtenidos.

En tal sentido, debemos indicar que la presente investigación será abordada mediante un enfoque analítico descriptivo, en el cual se describirán aspectos generales del tema con el fin de establecer si en la legislación panameña que rige en materia procesal penal de adolescentes, mantiene vigencia el principio de contradicción como manifestación de la garantía del debido proceso.

3.2 Fuentes de Información

En su parte operativa, la investigación está dirigida a la recolección de datos. Se utilizarán las siguientes fuentes de información para la elaboración de este trabajo:

3.2.1 Fuentes Materiales

Dentro de la presente investigación se utilizará como fuentes primarias los estudios doctrinales que a nivel nacional e

internacional existen, la legislación penal nacional e internacional, así como legislación de otros países.

3.2.2 Fuentes Personales

Dentro de estas fuentes podemos mencionar las opiniones de Magistrados, Jueces, Fiscales, Defensores de Oficio y Abogados Litigantes.

3.2.3 Instrumentos

Para la recopilación de información se efectuarán encuestas a Magistrados del Tribunal Superior de Panamá, a Jueces Especializados en la materia, Fiscales de Circuito, Defensores de Oficio y Abogados Litigantes, de la Provincia de Veraguas.

3.3 Operacionalización de Variables

3.3.1 Definición Conceptual del Principio de Contradicción.

Si bien en la mayoría de los Estados Democráticos, las personas que cometen hechos delictivos deben ser sometidas a un proceso previamente establecido, es necesario que dentro del mismo se le garanticen no solo el respeto de los derechos que son connaturales a su existencia, sino también que se le brinden las garantías que le permitan tener un proceso justo.

Bajo esta premisa y al ser considerados los adolescentes como personas, capaces de adquirir derechos y de responder penalmente frente a la violación de normas penales, pero tomando en consideración que son personas en proceso evolutivo de desarrollo, se hace necesario determinar si dentro de legislación panameña , todas las partes involucradas tienen igualdad de oportunidades para participar en los diversos actos procesales que se pueden dar en el Proceso Penal de Adolescentes, así como para contradecir lo afirmado por la parte contraria.

3.3.2 Definición Operacional

Variable N°1

Jurisdicción Penal de Adolescente.

Concepto

Aquel establecido para la investigación, juzgamiento y sanción de los hechos delictivos cometidos en Panamá por personas mayores de catorce años y menores de dieciocho años.

Indicadores

- Fase de Investigación
- Fase de Juzgamiento
- Penalidad
- Centro de cumplimiento de sanciones

- Funcionarios Especializados

Fuente

Fuente Testimonial de Magistrados, Jueces, Fiscales, Defensores de Oficio y Abogados Litigantes

Instrumento

Encuesta

Variable N°2

Vigencia del Principio de Contradicción.

Concepto

Derecho de las partes a tener iguales posibilidades de participar dentro de todo Proceso y a contradecir u oponerse a lo que señala la parte contraria.

Indicadores

- Conocimiento del principio de Contradicción.
- Elementos integrantes
- Normas Constitucionales
- Normas Legales
- Instrumentos internacionales aprobados por Panamá

Fuentes

Documentales y personales

Instrumento

Encuesta

3.4 Población y Muestra

3.4.1 Población Meta

El presente trabajo de investigación tiene una población de cien (100) personas, entre las cuales se encuentran Magistrados de Tribunal Superior de Adolescencia, Jueces de Adolescentes, Fiscales de Circuito, Defensores de Oficio y Abogados Litigantes.

3.4.2 Muestra Invitada

Se entrevistará a dos (2) Magistrados del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, a seis (6) Jueces de Adolescentes, seis (6) Fiscales de Circuito, seis (6) Defensores de Oficio y veinte (20) abogados Litigantes, lo que representa el cuarenta (40) por ciento de la población total.

POBLACIÓN	MUESTRA	PORCENTAJE
66 Abogados Litigantes	20	50.00
10 Defensores de Oficio	6	15.00
10 Fiscales de Circuito	6	15.00
10 Jueces de Adolescentes.	6	15.00
4 Magistrados de Adolescentes	2	5.00
Total	40	100.00

3.5 Instrumentos

3.5.1 Encuestas

Se aplicara a quienes componen la muestra invitada un cuestionario, con preguntas cerradas, en cuanto a si en Panamá dentro del Proceso Penal de Adolescente mantiene plena vigencia el principio de contradicción, como manifestación del Debido Proceso.

3.6 Tratamiento de la Información

Se utilizara un sistema de estadística descriptiva, para lo cual se elaborarán graficas y cuadros representativos de la información obtenida.

CAPITULO CUARTO: ANALISIS DE RESULTADOS

4.1 Presentación de Resultados

La información se obtuvo mediante la aplicación de una encuesta a cuatro categorías de Funcionarios Judiciales y Abogados Litigantes, divididos de la siguiente manera: Veinte (20) Abogados Litigantes, seis (6) Defensores de Oficio, seis (6) Fiscales de Circuito, seis (6) Jueces de Adolescentes, y dos (2) Magistrados del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. Esta muestra está constituida por 40 personas consultadas, que representan una muestra del 40% de un universo total de 100 personas, entre abogados litigantes y funcionarios judiciales que laboran en la provincias de Coclé, Panamá y Veraguas, en diferentes instituciones judiciales.

Los resultados obtenidos serán representados en cuadros y gráficas, lo cual facilitará arribar a las conclusiones que se plantean en el informe final.

CUADRO N°. 1

Funcionarios	TOTAL	%	¿Conoce usted las leyes que regulan en nuestro país el Proceso Penal de Adolescente?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	20	100	-	-	-	-
Defensores de Oficio	6	100	6	100	-	-	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	6	100	-	-	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	6	100	-	-	-	-
Magistrados	2	100	2	100	-	-	-	-
Total	40	100	40	100	-	-	-	-

En relación a esta pregunta sobre si conoce las leyes que regulan en nuestro país el Proceso Penal de Adolescente, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual los veinte (20) manifestaron que sí, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los seis (6) manifestaron que si, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual los seis (6) expresaron si, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Jueces Penales de Adolescentes, en la cual los seis (6) manifestaron si, lo que representa el 100% de los encuestados, igualmente se le aplico a dos (2) Magistrados,

en la cual los manifestaron que si, lo que representa un 100% de los encuestados.

CUADRO N°. 2

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Sabe usted bajo que doctrina se estructura el Proceso Penal de Adolescente en Panamá?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	18	90	2	10	-	-
Defensores de Oficio	6	100	6	100	-	-	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	5	83	1	17	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	6	100	-	-	-	-
Magistrados	2	100	2	100	-	-	-	-
Total	40	100	37	92	3	8	-	-

En relación a esta pregunta sobre si conoce la doctrina se estructura el Proceso Penal de Adolescente en Panamá, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual dieciocho (18) manifestaron que si, lo que representa el 90% de los encuestados; dos (2) manifestaron que no, lo que representa un 10% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los seis (6) manifestaron que si, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual cinco (5) expresaron que si, lo que representa el 83% de los encuestados; uno (1) manifestó no, lo que representa un 17% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Jueces Penales

de Adolescentes, en la cual los seis (6) manifestaron que si, lo que representa el 100% de los encuestados; igualmente se le aplico a dos (2) Magistrados, en la cual los dos (2) manifestaron conocer las doctrinas, lo que representa un 100% de los encuestados.

CUADRO N°. 3

Funcionarios	TOTAL	%	¿Conoce usted los instrumentos internacionales que han sido ratificados por la República de Panamá y que guardan relación con la Justicia Penal de Adolescentes?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	20	100	-	-	-	-
Defensores de Oficio	6	100	6	100	-	-	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	4	67	2	33	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	6	100	-	-	-	-
Magistrados	2	100	2	100	-	-	-	-
Total	40	100	38	95	2	5	-	-

En relación a esta pregunta sobre si conoce los instrumentos internacionales que han sido ratificados por la República de Panamá y que guardan relación con la Justicia Penal de Adolescentes, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual los veinte (20) manifestaron que sí, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los cuatro (6) manifestaron que si, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual cuatro (4) expresaron que si, lo que representa el 67% de los encuestados; dos (2) manifestaron que no, lo que representa un

33% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Jueces Penales de Adolescentes, en la cual los seis (6) manifestaron que si, lo que representa el 100% de los encuestados, igualmente se le aplico a dos (2) Magistrados, en la cual los dos (2) manifestaron conocer las leyes, lo que representa un 100% de los encuestados.

CUADRO N°. 4

Funcionarios	Total	%	¿Considera usted, que la Ley 40 de 1999, consagra manifestaciones integrantes de la Garantía del Debido Proceso?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	20	100	-	-	-	-
Defensores de Oficio	6	100	6	100	-	-	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	6	100	-	-	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	6	100	-	-	-	-
Magistrados	2	100	2	100	-	-	-	-
Total	40	100	40	100	-	-	-	-

En relación a esta pregunta sobre si la ley 40 de 1999, consagra manifestaciones integrantes de la Garantía del Debido Proceso, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual los veinte (20) manifestaron que sí, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los seis (6) manifestaron que si, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual los seis (6) expresaron que si, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Jueces Penales de Adolescentes, en la cual los seis (6) manifestaron que si, lo que

representa el 100% de los encuestados; igualmente se le aplicó a dos (2) Magistrados, en la cual los dos (2) manifestaron que si, consagra manifestaciones de la Garantía del Debido Proceso, lo que representa un 100% de los encuestados.

CUADRO N°. 5

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Sabe usted cuales son los elementos integrantes de la garantía del Debido Proceso?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	20	100	-	-	-	-
Defensores de Oficio	6	100	6	100	-	-	-	-
Fiscales Penales de Adolescentes	6	100	6	100	-	-	-	-
Jueces de Circuito	6	100	6	100	-	-	-	-
Magistrados	2	100	2	100	-	-	-	-
Total	40	100	40	100	-	-	-	-

En relación a esta pregunta sobre si sabe cuales son los elementos integrantes del debido proceso, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual los veinte (20) manifestaron que sí, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los seis (6) manifestaron que sí, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual los seis (6) expresaron que sí, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Jueces Penales de Adolescentes, en la cual los seis (6) manifestaron que si, lo que representa el 100% de los encuestados; igualmente se le aplico a dos (2) Magistrados, en la cual los dos (2)

manifestaron que sí, lo que representa un 100% de los encuestados.

CUADRO N°. 6.

Funcionarios	Total	%	¿Existe distinción entre la garantía del Debido Proceso reconocida en el Proceso Penal de Adultos y la garantía del Debido Proceso concebida para el Proceso Penal de Adolescente?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	20	100	-	-	-	-
Defensores de Oficio	6	100	6	100	-	-	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	6	100	-	-	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	6	100	-	-	-	-
Magistrados	2	100	2	100	-	-	-	-
Total	40	100	40	100	-	-	-	-

En relación a esta pregunta sobre si existe distinción entre la garantía del Debido Proceso reconocida en el Proceso Penal de Adultos y la garantía del Debido Proceso concebida para el Proceso Penal de Adolescente, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual los veinte (20) manifestaron que sí existen distinción, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los seis (6) manifestaron que sí, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual los seis (6) expresaron que sí, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Jueces Penales de Adolescentes, en la cual los seis (6) manifestaron que si existe distinción, lo que

representa el 100% de los encuestados; igualmente se le aplicó a dos (2) Magistrados, en la cual los dos (2) manifestaron que sí existe distinción, lo que representa un 100% de los encuestados.

CUADRO N°. 7.

Funcionarios	Total	%	¿Conoce usted cuales son los derechos y garantías especiales que se les reconocen a los Adolescentes en el Proceso Penal de Adolescente?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	20	100	-	-	-	-
Defensores de Oficio	6	100	6	100	-	-	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	6	100	-	-	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	6	100	-	-	-	-
Magistrados	2	100	2	100	-	-	-	-
Total	40	100	40	100	-	-	-	-

En relación a esta pregunta sobre si conoce cuales son los derechos y garantías especiales que se les reconocen a los Adolescentes en el Proceso Penal de Adolescente, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual los veinte (20) manifestaron que sí las conocen, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los seis (6) manifestaron que sí las conocen, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual los seis (6) expresaron que sí las conocen, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6)

Jueces Penales de Adolescentes, en la cual los seis (6) manifestaron que sí las conocen, lo que representa el 100% de los encuestados; igualmente se le aplicó a dos (2) Magistrados, en la cual los dos (2) manifestaron que sí las conocen, lo que representa un 100% de los encuestados.

CUADRO N°. 8.

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Sabe usted que participación tiene la víctima o persona ofendida dentro del Proceso Penal de Adolescente?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	20	100	-	-	-	-
Defensores de Oficio	6	100	6	100	-	-	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	6	100	-	-	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	6	100	-	-	-	-
Magistrados	2	100	2	100		-	-	-
Total	40	100	40	100	-		-	-

En relación a esta pregunta sobre si conoce que participación tiene la víctima o persona ofendida dentro del Proceso Penal de Adolescente, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual los veinte (20) manifestaron sí saber, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los seis (6) manifestaron sí saber, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual los seis (6) expresaron sí saber, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Jueces Penales de Adolescentes, en la cual los seis (6) manifestaron

si saber, lo que representa el 100% de los encuestados; igualmente se le aplico a dos (2) Magistrados, en la cual los dos (2) manifestaron sí saber, lo que representa un 100% de los encuestados.

CUADRO Nº. 9.

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Puede la persona ofendida constituirse en querellante dentro del Proceso Penal de Adolescente?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	18	90	2	10	-	-
Defensores de Oficio	6	100	6	100	-	-	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	6	100	-	-	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	6	100	-	-	-	-
Magistrados	2	100	2	100	-	-	-	-
Total	40	100	38	95	2	5	-	-

En relación a esta pregunta sobre si Puede la persona ofendida constituirse en querellante dentro del Proceso Penal de Adolescente, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual dieciocho (18) manifestaron que sí puede, lo que representa el 90% de los encuestados, dos (2) manifestaron que no puede, lo que representa un 10% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los seis (6) manifestaron que sí puede, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual los seis (6) expresaron que sí puede, lo que representa el 100% de los encuestados; se le

aplicó a seis (6) Jueces Penales de Adolescentes, en la cual los seis (6) manifestaron que si puede, lo que representa el 100% de los encuestados; igualmente se le aplico a dos (2) Magistrados, en la cual los dos (2) manifestaron que sí puede, lo que representa un 100% de los encuestados.

CUADRO N°. 10.

Funcionarios	Total	%	¿Interpuesta querella por la persona ofendida, la misma se considera como parte en el Proceso Penal de Adolescente?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	16	80	4	20	-	-
Defensores de Oficio	6	100	6	100	-	-	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	6	100	-	-	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	6	100	-	-	-	-
Magistrados	2	100	2	100	-	-	-	-
Total	40	100	36	90	4	10	-	-

En relación a esta pregunta sobre si Interpuesta querella por la persona ofendida, la misma se considera como parte en el Proceso Penal de Adolescente, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual dieciséis (16) manifestaron que sí se considera, lo que representa el 80% de los encuestados, cuatro (4) manifestaron no saber, lo que representa un 20% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los seis (6) manifestaron que sí se considera, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual los seis (6) expresaron que sí se considera, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6)

Jueces Penales de Adolescentes, en la cual los seis (6) manifestaron que sí se considera, lo que representa el 100% de los encuestados, igualmente se le aplicó a dos (2) Magistrados, lo cual los dos (2) manifestaron que sí se considera,, lo que representa un 100% de los encuestados.

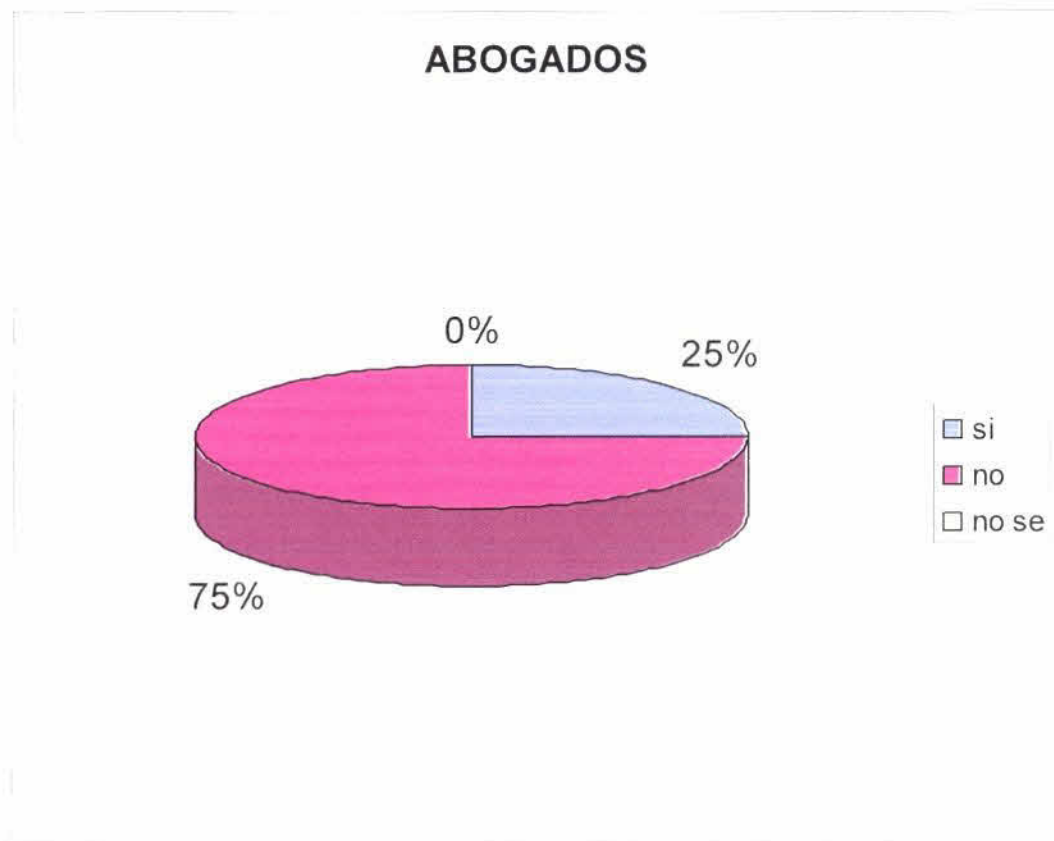
CUADRO N°. 11.

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Considera usted que dentro del proceso Penal de Adolescente existe igualdad tanto para el adolescente que se le imputa la comisión de un delito como para la persona ofendida?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	5	25	15	75	-	-
Defensores de Oficio	6	100	2	33	4	67	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	-	-	6	100	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	4	67	2	33	-	-
Magistrados	2	100	2	100	-	-	-	-
Total	40	100	13	33	27	67	-	-

En relación a esta pregunta sobre si dentro del proceso Penal de Adolescente existe igualdad tanto para el adolescente que se le imputa la comisión de un delito como para la persona ofendida, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual cinco (5) manifestaron que sí consideran, lo que representa un 25% de los encuestados, quince (15) manifestaron que no consideran, lo que representa el 75% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual dos (2) manifestaron que sí consideran, lo que representa el 33%, de los encuestados, cuatro

(4) manifestaron que no se considera, lo que representa un 67% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual los seis (6) expresaron que no consideran, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Jueces Penales de Adolescentes, en la cual cuatro (4) manifestaron que sí consideran, lo que representa el 67% de los encuestados, dos (2) manifestaron que no se considera, lo que representa un 33%, de los encuestados; igualmente se le aplicó a dos (2) Magistrados, lo cual los dos (2) manifestaron sí saber, lo que representa un 5% de los encuestados.

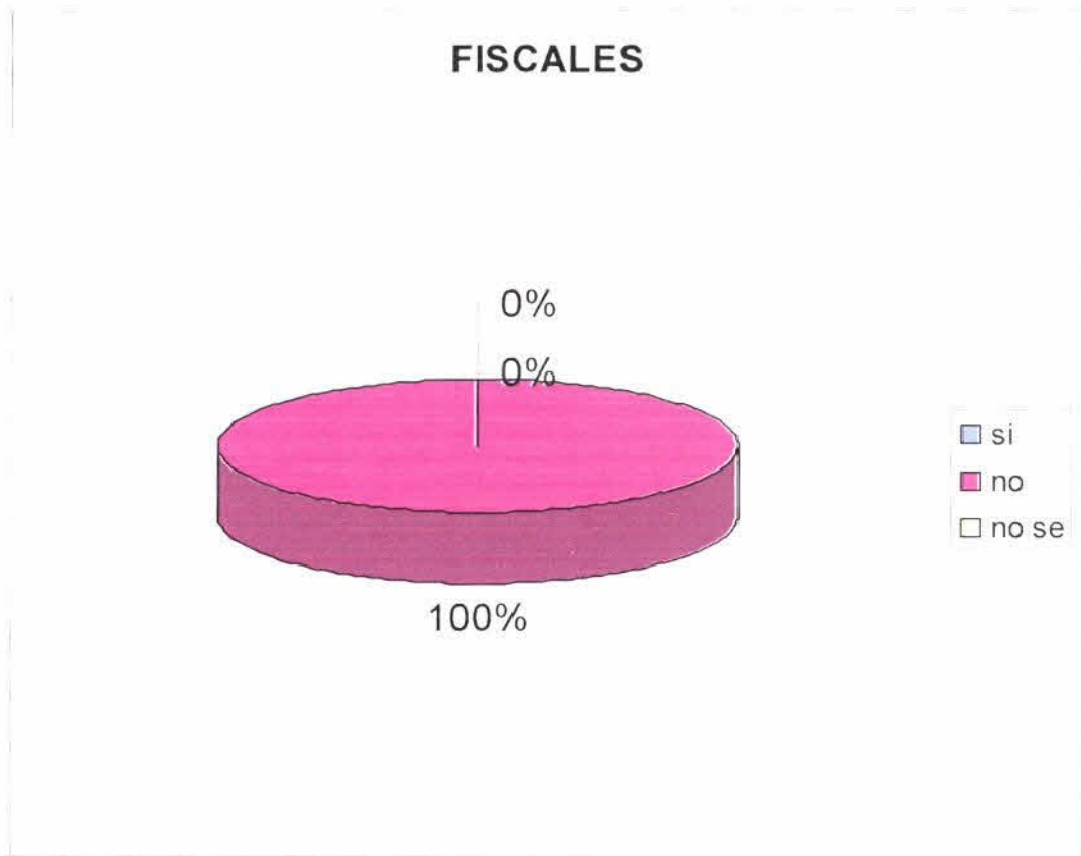
GRAFICA N°.1.
EXISTE IGUALDAD DENTRO DEL PROCESO PENAL DE
ADOLESCENTE TANTO PARA EL ADOLESCENTE QUE SE LE
IMPUTA UN DELITO COMO PARA LA PERSONA OFENDIDA.



GRAFICA N°.2.
EXISTE IGUALDAD DENTRO DEL PROCESO PENAL DE
ADOLESCENTE TANTO PARA EL ADOLESCENTE QUE SE LE
IMPUTA UN DELITO COMO PARA LA PERSONA OFENDIDA

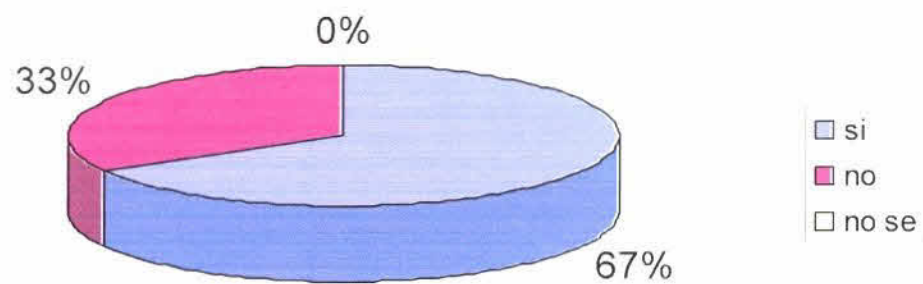


GRAFICA N°.3.
EXISTE IGUALDAD DENTRO DEL PROCESO PENAL DE
ADOLESCENTE TANTO PARA EL ADOLESCENTE QUE SE LE
IMPUTA UN DELITO COMO PARA LA PERSONA OFENDIDA



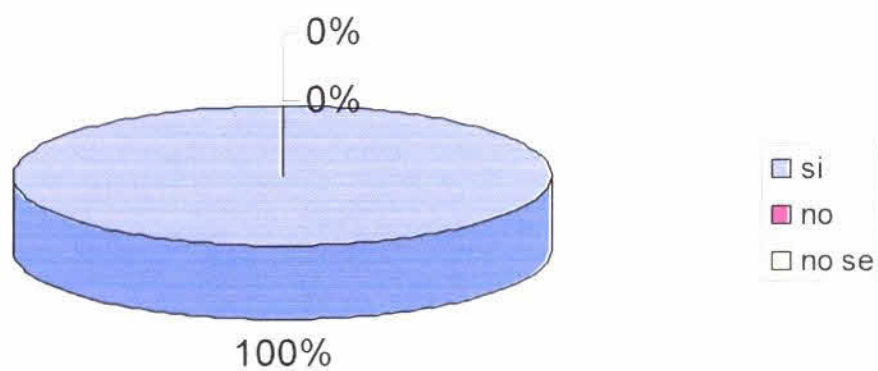
GRAFICA N°.4.
EXISTE IGUALDAD DENTRO DEL PROCESO PENAL DE
ADOLESCENTE TANTO PARA EL ADOLESCENTE QUE SE LE
IMPUTA UN DELITO COMO PARA LA PERSONA OFENDIDA

JUECES PENALES DE ADOLESCENTES



GRAFICA N°.5 .
EXISTE IGUALDAD DENTRO DEL PROCESO PENAL DE
ADOLESCENTE TANTO PARA EL ADOLESCENTE QUE SE LE
IMPUTA UN DELITO COMO PARA LA PERSONA OFENDIDA

MAGISTRADOS



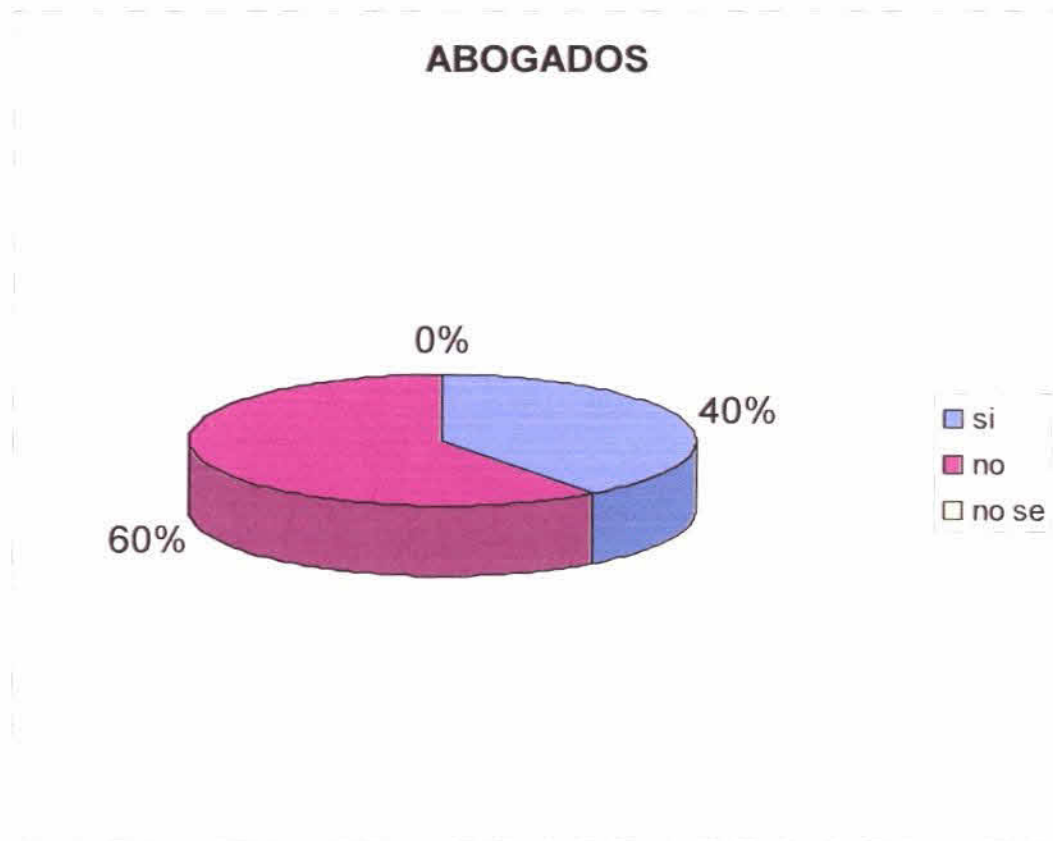
CUADRO N°. 12.

Funcionarios	TOTAL	%	¿La representación legal de la parte ofendida puede presentar alegatos en el juicio de fondo dentro del Proceso Penal de Adolescente?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	8	40	12	60	-	-
Defensores de Oficio	6	100	-	-	6	100	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	-	-	6	100	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	-	-	6	100	-	-
Magistrados	2	100	-	-	2	100	-	-
Total	40	100	8	20	32	80	-	-

En relación a esta pregunta sobre si La representación legal de la parte ofendida puede presentar alegatos en el juicio de fondo dentro del Proceso Penal de Adolescente, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual los ocho (8) manifestaron que sí puede, lo que representa el 40% de los encuestados, doce (12) manifestaron que no puede, lo que representa un 60% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los seis (6) manifestaron que no puede, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual los seis (6) expresaron que no puede, lo que representa el 100% de los encuestados, se le aplicó a seis (6) Jueces Penales de Adolescentes, en la cual los seis (6) manifestaron que no puede, lo

que representa el 100% de los encuestados; igualmente se le aplico a dos (2) Magistrados, en la cual los dos (2) manifestaron que no puede, lo que representa un 100% de los encuestados.

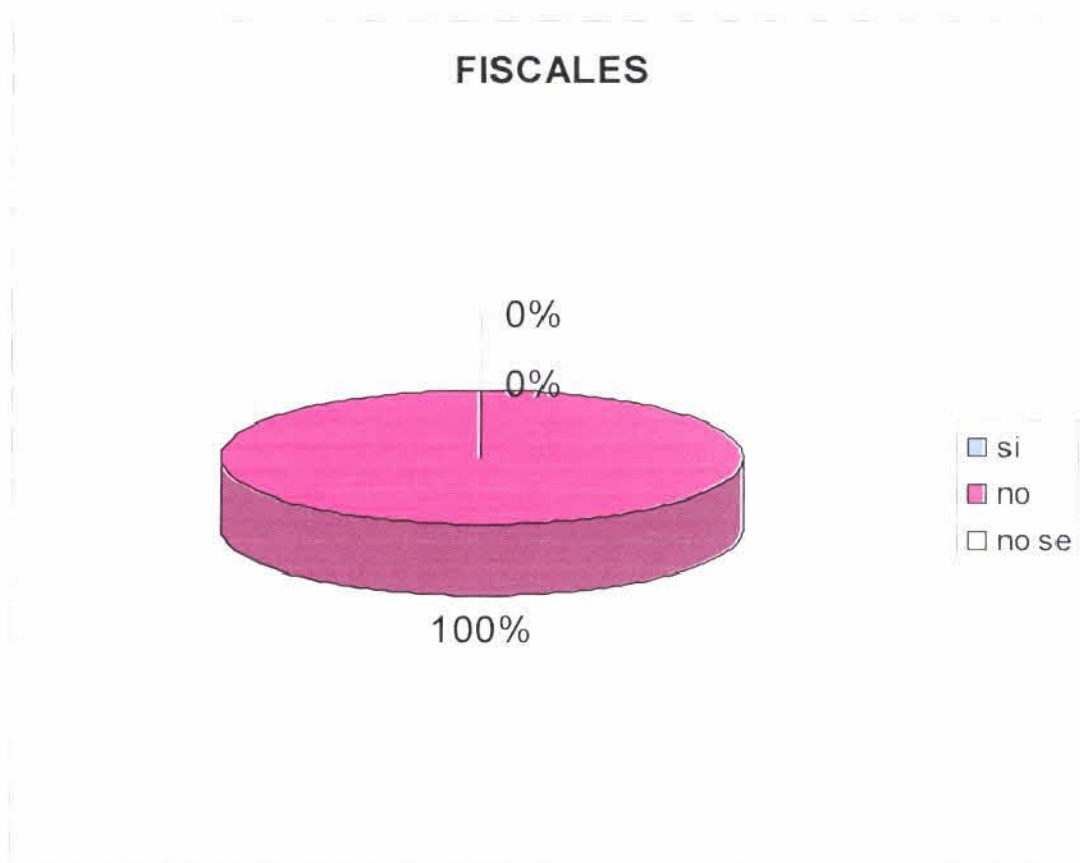
**LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PARTE OFENDIDA
DENTRO DEL PROCESO PENA DE ADOLESCENTE.
GRAFICA Nº.6 .**



**LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PARTE OFENDIDA
DENTRO DEL PROCESO PENA DE ADOLESCENTE.
GRAFICA N°.7 .**

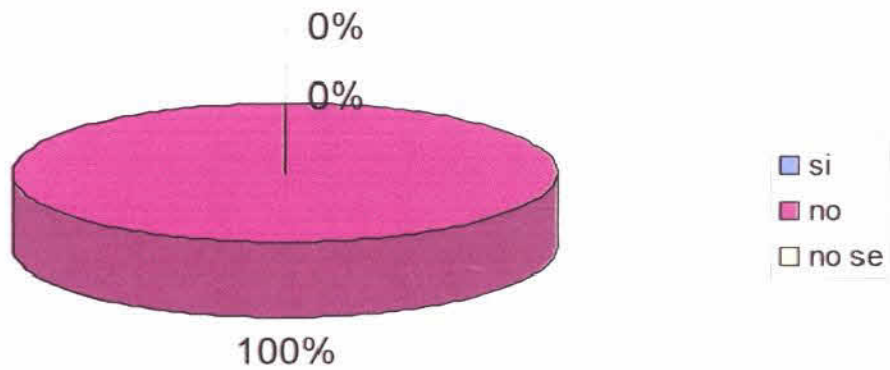


**LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PARTE OFENDIDA
DENTRO DEL PROCESO PENA DE ADOLESCENTE.
GRAFICA N°. 8.**



**LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PARTE OFENDIDA
DENTRO DEL PROCESO PENA DE ADOLESCENTE.
GRAFICA N°.9 .**

JUECES PENALES DE ADOLESCENTES



**LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PARTE OFENDIDA
DENTRO DEL PROCESO PENA DE ADOLESCENTE.
GRAFICA N°. 10.**



CUADRO No. 13.

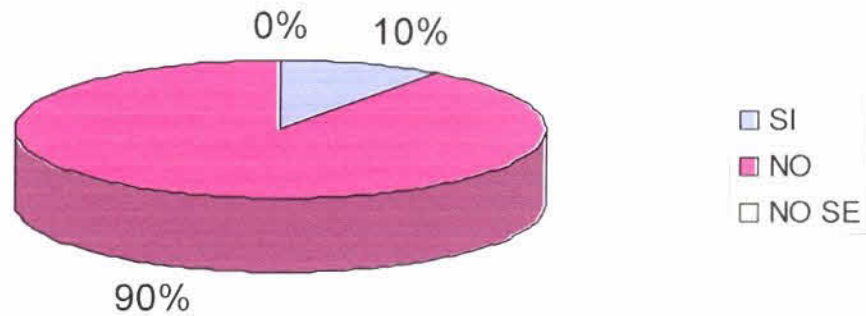
FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Puede la parte ofendida contradecir todas las decisiones adoptadas dentro del Proceso Penal de Adolescente?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	2	10	18	90	-	-
Defensores de Oficio	6	100	-	-	6	100	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	-	-	6	100	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	-	-	6	100	-	-
Magistrados	2	100	-	-	6	100	-	-
Total	40	100	2	5	38	95	-	-

En relación a esta pregunta sobre si puede la parte ofendida contradecir todas las decisiones adoptadas dentro del Proceso Penal de Adolescentes, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual los dos (2) manifestaron que sí puede, lo que representa el 10% de los encuestados, dieciocho (18) manifestaron que no puede, lo que representa el 90% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los seis (6) manifestaron que no puede, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual los seis (6) expresaron que no puede, lo que representa el 100% de los

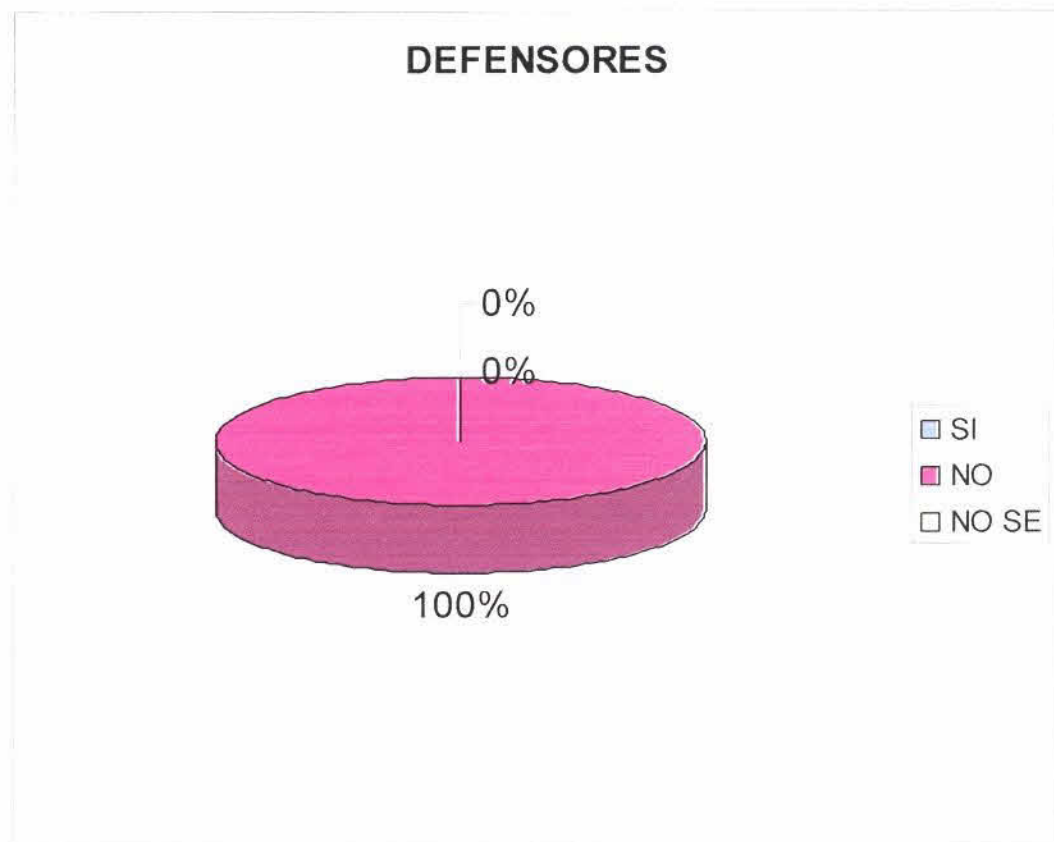
encuestados; se le aplicó a seis (6) Jueces Penales de Adolescentes, en la cual los seis (6) manifestaron que no puede, lo que representa el 100% de los encuestados; igualmente se le aplicó a dos (2) Magistrados, lo cual los dos (2) manifestaron que no puede, lo que representa un 5% de los encuestados.

**PARTE OFENDIDA CONTRADECIR TODAS LAS
DECISIONES ADOPTADAS DENTRO DEL PROCESO
PENAL DE ADOLESCENTE.
GRAFICA N°.11 .**

ABOGADOS



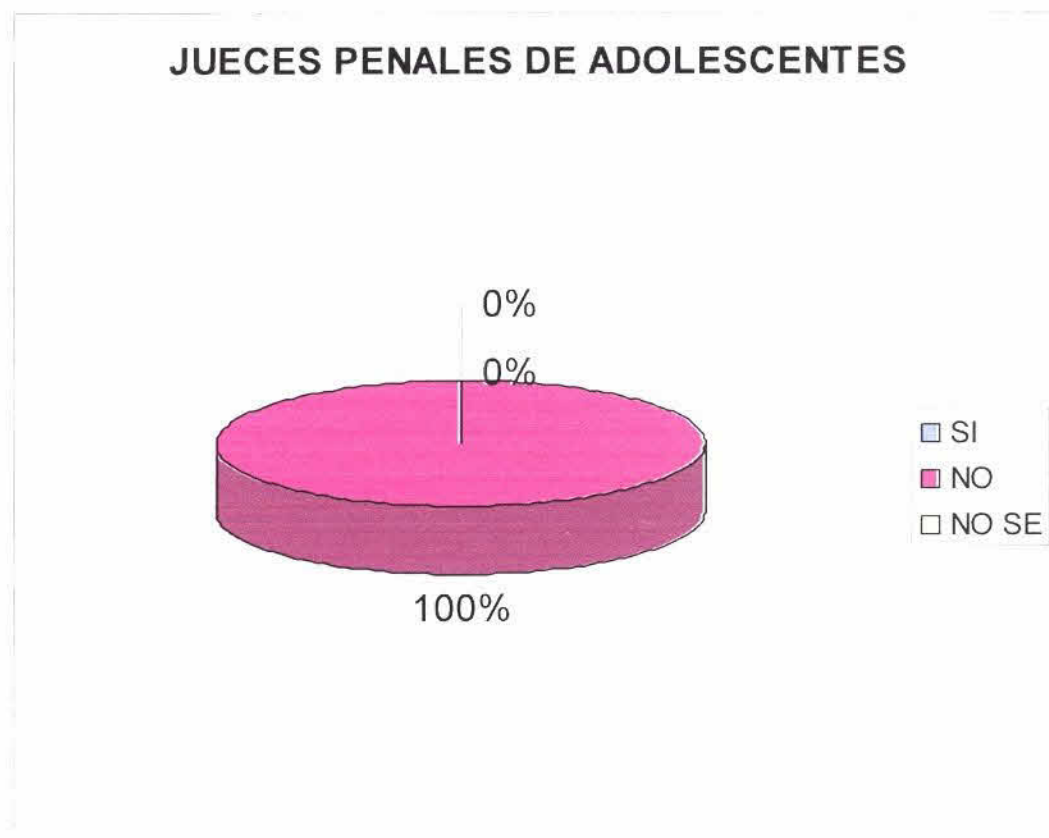
**PARTE OFENDIDA CONTRADECIR TODAS LAS
DECISIONES ADOPTADAS DENTRO DEL PROCESO
PENAL DE ADOLESCENTE.
GRAFICA N°.12 .**



**PARTE OFENDIDA CONTRADECIR TODAS LAS
DECISIONES ADOPTADAS DENTRO DEL PROCESO
PENAL DE ADOLESCENTE.
GRAFICA N°. 13.**



**PARTE OFENDIDA CONTRADECIR TODAS LAS
DECISIONES ADOPTADAS DENTRO DEL PROCESO
PENAL DE ADOLESCENTE.
GRAFICA N°.14.**



**PARTE OFENDIDA CONTRADECIR TODAS LAS
DECISIONES ADOPTADAS DENTRO DEL PROCESO
PENAL DE ADOLESCENTE.
GRAFICA N°. 15.**



CUADRO N°. 14.

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Sabe usted que recursos puede interponer la parte ofendida dentro del proceso penal de adolescente?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	20	100	-	-	-	-
Defensores de Oficio	6	100	6	100	-	-	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	6	100	-	-	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	6	100	-	-	-	-
Magistrados	2	100	2	100	-	-	-	-
Total	40	100	40	100	-	-	-	-

En relación a esta pregunta sobre si conoce que recursos puede interponer la parte ofendida dentro del proceso penal de adolescente, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual los veinte (20) manifestaron sí saber, lo que representa el 100% de los encuestados, se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los seis (6) manifestaron sí, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual los seis (6) expresaron sí saber, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Jueces Penales de Adolescentes, en la cual los seis (6) manifestaron

CUADRO N°. 14.

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Sabe usted que recursos puede interponer la parte ofendida dentro del proceso penal de adolescente?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	20	100	-	-	-	-
Defensores de Oficio	6	100	6	100	-	-	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	6	100	-	-	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	6	100	-	-	-	-
Magistrados	2	100	2	100	-	-	-	-
Total	40	100	40	100	-	-	-	-

En relación a esta pregunta sobre si conoce que recursos puede interponer la parte ofendida dentro del proceso penal de adolescente, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual los veinte (20) manifestaron sí saber, lo que representa el 100% de los encuestados, se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los seis (6) manifestaron sí, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual los seis (6) expresaron sí saber, lo que representa el 100% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Jueces Penales de Adolescentes, en la cual los seis (6) manifestaron

si, lo que representa el 100% de los encuestados; igualmente se le aplico a dos (2) Magistrados, en la cual los dos (2) manifestaron sí saber, lo que representa un 100% de los encuestados.

si, lo que representa el 100% de los encuestados; igualmente se le aplico a dos (2) Magistrados, en la cual los dos (2) manifestaron sí saber, lo que representa un 100% de los encuestados.

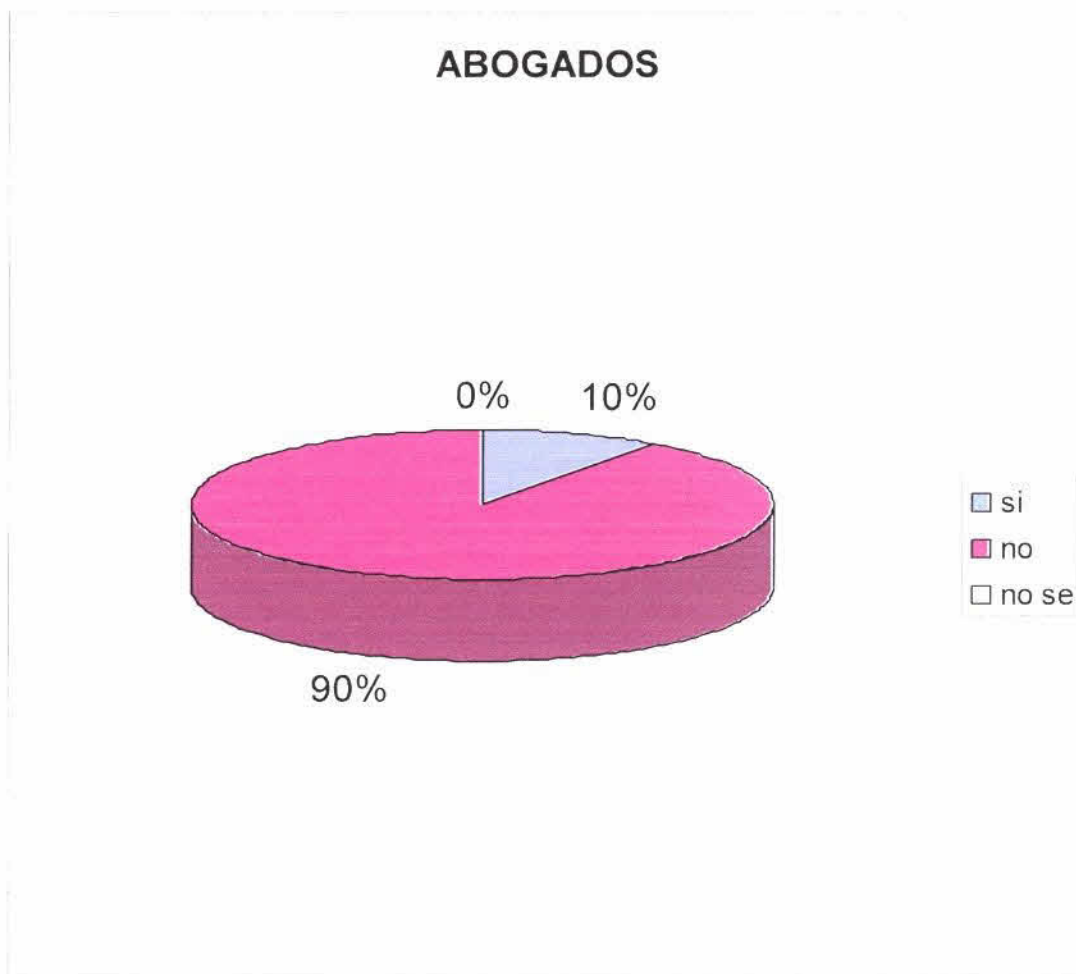
CUADRO No. 15.

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Considera usted que dentro del Proceso Penal de Adolescente existe plena vigencia del principio de contradicción, para todos los actores del mismo?					
			SI	%	NO	%	NO SE	%
Abogados	20	100	2	10	18	90	-	-
Defensores de Oficio	6	100	6	100	-	-	-	-
Fiscales de Circuito	6	100	-	-	6	100	-	-
Jueces Penales de Adolescentes	6	100	2	35	4	65	-	-
Magistrados	2	100	2	100	-	-	-	-
Total	40	100	12	40	28	60	-	-

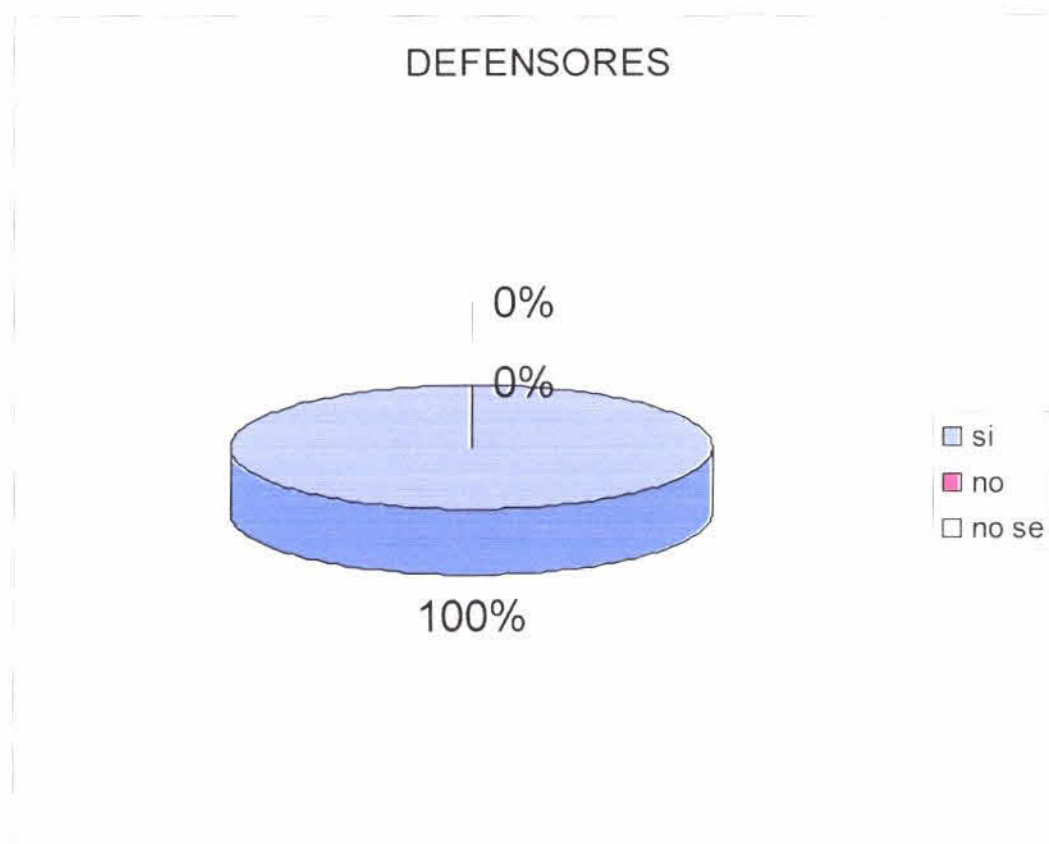
En relación a esta pregunta sobre si dentro del Proceso Penal de Adolescente existe plena vigencia del principio de contradicción para todos los actores del mismo, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados, en la cual los dos (2) manifestaron que sí considera, lo que representa el 10% de los encuestados, dieciocho (18) manifestaron que no considera, lo que representa un 90% de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Defensores de Oficio, en la cual los seis (6) manifestaron que sí consideran, lo que representa el 100%, de los encuestados; se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito, en la cual los seis (6) expresaron que no considera, lo que

representa el 100% de los encuestados, se le aplicó a seis (6) Jueces Penales de Adolescentes, en la cual dos (2) manifestaron que si consideran, lo que representa el 33% de los encuestados, cuatro (4) manifestaron que no consideran, lo que representa un 67% de los encuestados; igualmente se le aplico a dos (2) Magistrados, lo cual los dos (2) manifestaron que sí consideran, lo que representa un 100% de los encuestados.

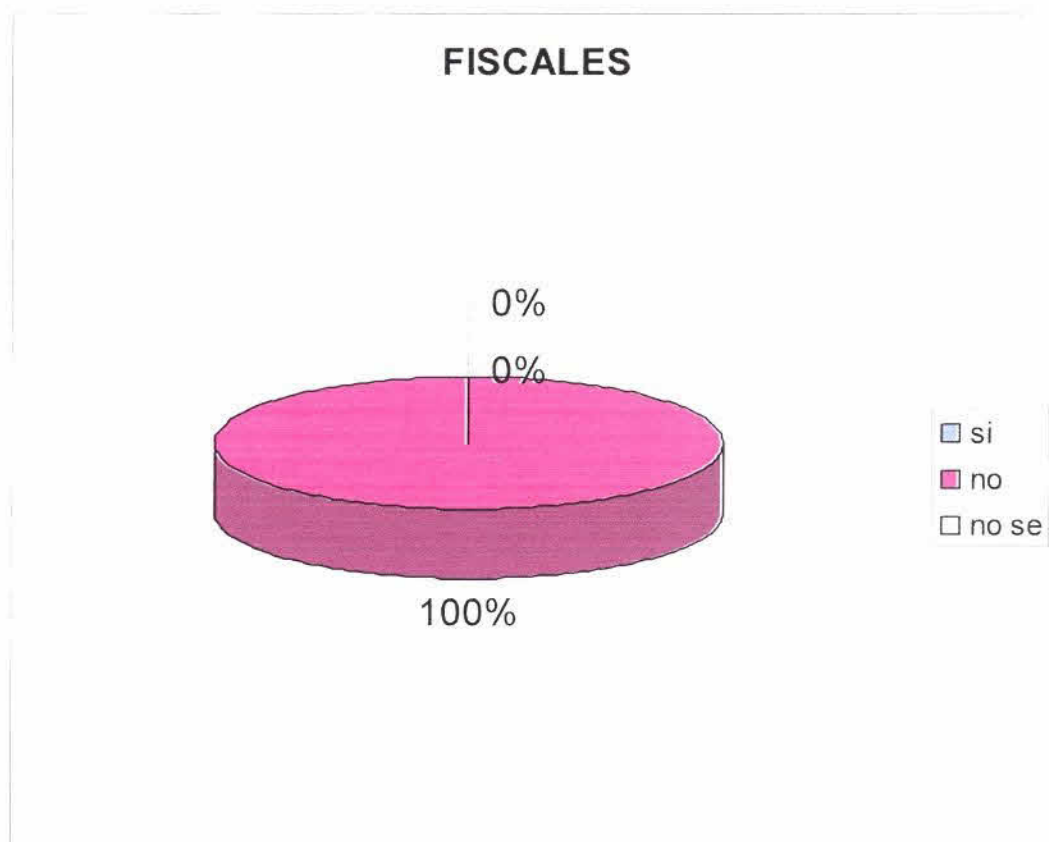
**Existe plena vigencia de la garantía del debido
proceso dentro del proceso penal de adolescente.
GRAFICA N°.16.**



**Existe plena vigencia de la garantía del debido
proceso dentro del proceso penal de adolescente.
GRAFICA N°.17.**

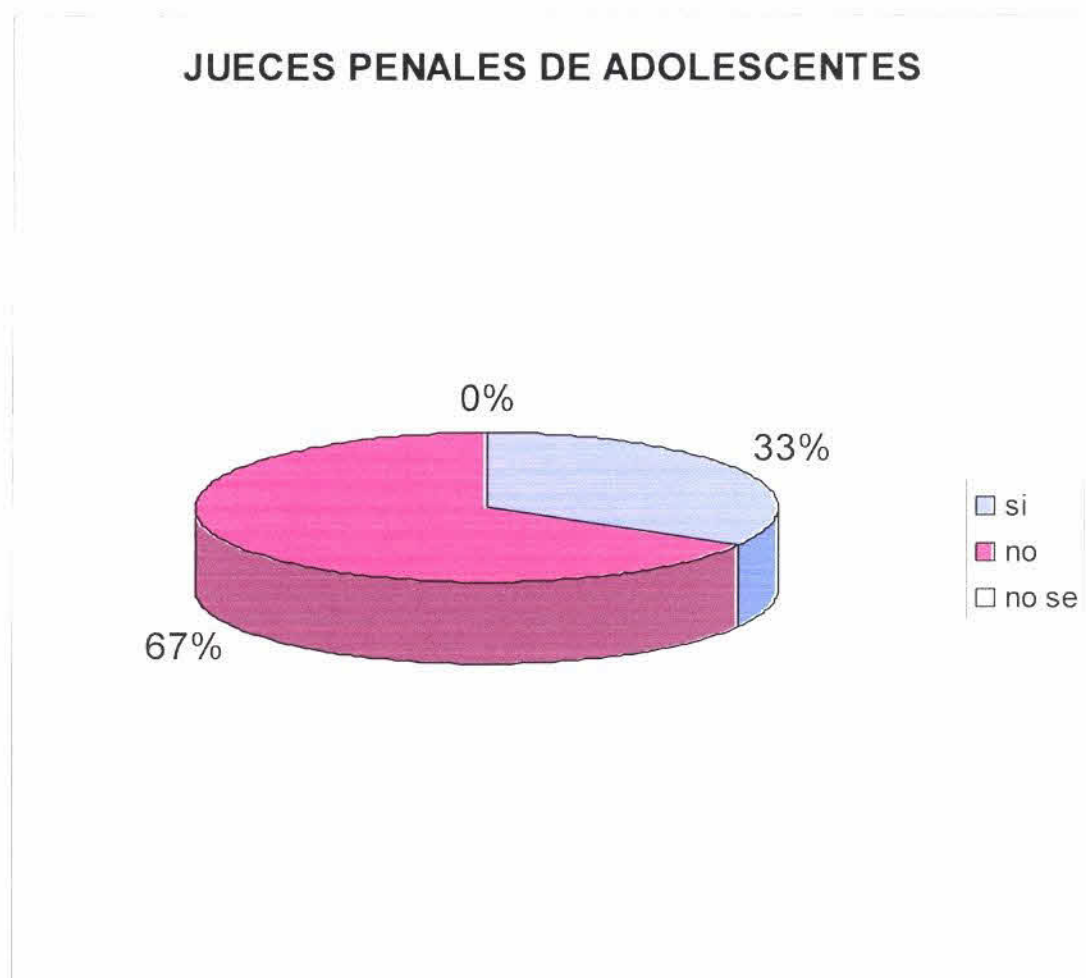


Existe plena vigencia de la garantía del debido proceso dentro del proceso penal de adolescente.
GRAFICA N°. 18.



**Existe plena vigencia del principio de contradicción
dentro del proceso penal de adolescente.**

GRAFICA N°.19.



**Existe plena vigencia de la garantía del debido
proceso dentro del proceso penal de adolescente.
GRAFICA N°.20.**



CONCLUSIONES

- Partiendo desde la documentación, el debido proceso fue contemplado por primera vez en un documento en LA CARTA MAGNA del año 1215 en Inglaterra, con el Rey Juan, conocido como JUAN SIN TIERRA.
- Conforme es recogida esta garantía dentro de la Constitución Nacional, podemos conceptualizarla como aquel derecho que tiene toda persona, cualquiera que sea su raza, sexo, nacionalidad, edad, credo religioso, a que dentro de un proceso penal, policivo o disciplinario, le sean garantizados y respetados sus derechos fundamentales, como el de ser oído, el de defensa, el contradictorio, a que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho, entre otros.
- Dentro del marco del derecho internacional, diversos instrumentos que guardan relación directa con los derechos humanos hacen referencia a la garantía del debido proceso, siendo que la gran mayoría de estos han sido ratificados a través de Ley por la República de Panamá, pasando los mismos a formar parte del derecho interno.
- A nivel jurisprudencial, se ha considerado en múltiples fallos que la garantía del debido proceso dentro de la Constitución de la

República de Panamá, se encuentra recogida dentro del artículo 32 y que la misma viene a ser complementada por otros artículos tales como el 19, 21, 22, 31 y 215.

- Bajo la égida del principio de la protección integral del adolescente, se estructura un proceso de naturaleza penal en el cual aquellos adolescentes a los cuales se le acusa de haber cometido hechos delictivos, sean juzgados por una autoridad competente, respetando todas aquellas garantías penales que le asisten a los imputados en el proceso penal de adultos, además de una serie de garantías especiales y teniendo presente que se trata de sujetos de derecho que se encuentran en periodo evolutivo de desarrollo.
- El régimen de responsabilidad penal para los adolescentes, propiamente tal viene a consagrarse en nuestro país con la aprobación y vigencia de la Ley 40 de 1999.
- Tal como ocurre en el Proceso Penal de adultos, la Ley 40 de 1999, estructura el Proceso Penal de Adolescentes en tres fases o etapas a saber: La Etapa Preliminar o de Investigación, La etapa de Calificación y La Etapa de Juzgamiento propiamente tal.
- La garantía del debido proceso es integrada por una serie de elementos, los cuales guardan relación directa con los intereses

que la misma tutela, de forma tal que uno de ellos es el principio de contradicción o bilateralidad.

- La Ley 40 de 1999, solo permite al apoderado judicial de la persona ofendida a intervenir en los supuestos previstos por la misma y de acuerdo a las formalidades que ella prevé, lo cual trae como consecuencia inmediatas limitaciones en cuanto al actuar de la víctima en la defensa de sus intereses, dentro del proceso penal de adolescentes, pues de partida se le elimina la posibilidad de que puede adquirir la calidad de parte, aún cuando se le reconoce la posibilidad de que pueda nombrar un apoderado judicial.
- El recurso de casación solo procede en el proceso penal de adolescentes, contra sentencias condenatorias, no así absolutorias, por lo que el Fiscal Especial de Adolescentes y el representante legal de la víctima le quedaría vedada la posibilidad de recurrir en casación, cuando se trate de una sentencia de tipo absolutoria, a pesar de estar legitimados para interponer este tipo de recursos de conformidad con el artículo 120 de la mencionada ley.
- En la legislación comparada, países como Costa Rica y República Dominicana, si bien establecen en su normativa que regula el proceso penal de adolescentes, una serie de garantías a favor de

los adolescentes, garantizan el ejercicio efectivo del principio de contradicción.

RECOMENDACIONES

- La vigencia del principio de contradicción como manifestación de la garantía del debido proceso, no está limitado a un proceso determinado, el mismo debe ser entendido y aplicado para todo tipo de proceso, destacando la igualdad procesal de las partes, por consiguiente dentro del proceso penal de adolescentes se hace necesario hacer una reformulación de las actividades practicadas por las partes en las distintas etapas del proceso.
- El Recurso de Casación Penal, no puede estar supeditado única y exclusivamente a revisar sentencias desfavorables al adolescente, pues ello se traduce en un privilegio otorgado a este sector de la población y que no encuentra sustento en ninguna normativa internacional, por lo que es necesario efectuar modificaciones a la normativa que regula este tipo de recursos en el proceso penal de adolescentes, a efectos de posibilitar en igualdad de oportunidades a todas las partes y ante los supuestos previstos por la propia ley, de incoar este recurso sea por sentencias absolutorias o condenatorias.
- Es necesario realizar una revisión integral de las normas que regulan la actuación de la víctima dentro del proceso penal de adolescentes, pues la actual normativa hace ilusoria la participación de la víctima en el proceso a pesar de permitirle la posibilidad de nombrar un representante legal, de tal forma que la misma tenga la posibilidad de presentar pruebas, contradecir las presentadas por la defensa y hacer alegaciones en cada una de las etapas procesales.

- La aprobación de la Ley 63 del 28 de agosto del 2008, mediante la cual se establece un nuevo modelo de sistema procesal penal en la República de Panamá para los adultos, hace necesario realizar modificaciones al proceso penal de adolescentes vigente, a efectos de adecuar el mismo a este nuevo modelo procesal de corte garantista y en el cual la vigencia del principio de contradicción y sus diversas manifestaciones se constituye en un pilar fundamental de este sistema.

BIBLIOGRAFIA

Libros

ALVARADO VELLOSO, Adolfo (2004). **Debido Proceso Versus Pruebas de Oficio**. Editorial Temis S.A., Bogota –Colombia.

DEVIS ECHANDIA, Hernando (1994). **Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso, Tomo I**. Décima Tercera Edición, Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín, Colombia.

FABREGA PONCE, Jorge (1990). **Estudios Procesales, Tomo III**, Editora Jurídica Panameña, Panamá.

HOYOS, Arturo (1995). **El Debido Proceso**. Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogota.

LONDOÑO JIMENEZ, Hernando (1989). **Tratado de Derecho Procesal Penal. T.I**, San Fe de Bogotá; Editorial Temis.

PEREZ LUÑO, Antonio (1995). **Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución**, Editorial Tecnos, 5ª Edición, Madrid.

QUINTERO Beatriz y PRIETO, Eugenio (1992). **Teoría General del Proceso, Tomo I**, Editorial Temis, Santa Fe de Bogota,.

TIFFER SOTOMAYOR (2001), Carlos. **Justicia Juvenil. Instrumentos Internacionales de las Naciones Unidas y la Experiencia de Costa Rica**, UNICEF.

Publicaciones

Corte Suprema de Justicia (1994). **El Órgano Judicial en Democracia**, Impreso en Poligráfica S.A., Primera Edición, Panamá,.

Escuela Judicial (1999). **La Protección Integral de la Niñez y Adolescencia: Un Nuevo Paradigma**, Panamá.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1994). **Estudios Básicos de Derechos Humanos**, Tomo I, Primera Edición, San José.

Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal (2004). **Primer Congreso Panameño de Derecho Procesal**, Panamá..

Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal (2005). **Segundo Congreso Panameño de Derecho Procesal**, Panamá.

Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal (2006). **Tercer Congreso Panameño de Derecho Procesal**, Panamá.

Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal (2007). **Cuarto Congreso Panameño de Derecho Procesal**, Panamá.

Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal (2008). **Quinto Congreso Panameño de Derecho Procesal**, Panamá.

MINISTERIO PÚBLICO (1996). **Segundo Congreso de Procuradores Fiscales y Personeros**, Panamá.

MINISTERIO PÚBLICO (2002). **Séptimo Congreso Nacional de Procuradores, Fiscales y Personeros**, Panamá.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (2000). Revista Internacional de Política Criminal No.49. **Las Naciones Unidas y la Justicia de Menores: Guía de Las Normas Internacionales y las Prácticas más Idóneas**, Nueva York.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (2000). Revista Internacional de Política Criminal No. 50. **Las Naciones Unidas y la Justicia de Menores: Guía de Las Normas Internacionales y las Prácticas más Idóneas**, Nueva York,.

Órgano Judicial-UNICEF (1999). **Los Derechos de la Niñez y Adolescencia**, Panamá.

PNUD.-C.G.P.J. de España. **Modulo Instruccional en el Área Procesal Penal. Principio del Debido Proceso**.

UNICEF-Órgano Judicial (2001). **Debido Proceso y Justicia Penal Garantista para la Adolescencia**, Panamá.

UNICEF (2002). **Sistemas de Responsabilidad Penal para Adolescentes**. Panamá,.

Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (2000). **Escritos y Propuestas de Profesores Procesalistas**, Panamá.

. Dictionarios

CABANELLAS, Guillermo (1982). **Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales**, sexta edición, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina.

- Internet-Paginas Web

- > www.alta vista.com
- > www.google.com.
- > www.monografias.com
- > www.organojudicial.gob.pa

Legislación

- > Constitución Política de 1972 de la República de Panamá.
- > Código de la Familia de la República de Panamá
- > Código Judicial de la República de Panamá
- > Ley 40 de 1999
- > Ley 46 del 2003
- > Ley 50 del 2005
- > Ley 15 del 2007

Instrumentos Internacionales

Convención Americana de Derechos Humanos.

Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos

Convención Sobre los Derechos del Niño.

Declaración Americana de Derechos Humanos.

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.

Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores.

Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

ANEXO

UNIVERSIDAD DE PANAMA
CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS
DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL

INSTRUMENTO DIRIGIDO A: Magistrados, Jueces, Fiscales, Defensores de Oficio y Abogados litigantes.

OBJETIVO: El objetivo de este trabajo es establecer si la garantía del debido proceso tiene una vigencia plena en el Proceso Penal de Adolescentes.

Le agradecemos su colaboración.

INSTRUCCIONES: Marque con una equis (x) la alternativa de su preferencia.

Coloque una equis (x) al grupo que pertenece

MAGISTRADO () JUEZ () FISCAL () DEFENSOR DE
OFICIO ()

ABOGADO LITIGANTE ()

1. ¿Conoce usted las leyes que regulan en nuestro país el Proceso Penal de Adolescentes?

Si ()

No ()

No sé ()

2. ¿Sabe usted bajo que doctrina se estructura el Proceso Penal de Adolescentes en Panamá?

Si ()

No ()

No sé ()

3. ¿Conoce usted los instrumentos internacionales que han sido ratificados por la República de Panamá y que guardan relación con la justicia Penal de Adolescentes?

Si ()

No ()

No sé ()

4. ¿Considera usted que la Ley 40 de 1999, consagra manifestaciones de la garantía del Debido Proceso?

Si ()

No ()

No sé ()

5. ¿Sabe usted cuales son los elementos integrantes de la garantía del Debido Proceso?

Si ()

No ()

No sé ()

6. ¿Existe distinción entre la garantía del Debido Proceso reconocida en el Proceso Penal de Adultos y la garantía del Debido Proceso concebida para el Proceso Penal de Adolescentes?

Si ()

No ()

No sé ()

7. ¿Conoce usted cuales son los derechos y garantías especiales que se le reconocen a los adolescentes en el Proceso Penal de Adolescentes?

Si ()

No ()

No sé ()

8. ¿Sabe usted que participación tiene la víctima o persona ofendida dentro del Proceso Penal de Adolescentes?

Si ()

No ()

No sé ()

9. ¿Puede la persona ofendida constituirse en querellante dentro del proceso penal de adolescentes?

Si ()

No ()

No sé ()

10. ¿Interpuesta Querella por la persona ofendida, la misma es considerada como parte en el Proceso Penal de Adolescentes?

Si ()

No ()

No sé ()

11. ¿Considera usted que dentro del proceso Penal de adolescentes existe igualdad de participación tanto para el adolescente que se le imputa la comisión de un delito como para la persona ofendida y el Fiscal de Adolescentes?

Si ()

No ()

No sé ()

12. ¿La representación legal de la parte ofendida puede presentar alegatos en el juicio de fondo dentro del Proceso Penal de Adolescentes?

Si ()

No ()

No sé ()

13. ¿Puede la parte ofendida y el Fiscal de Adolescentes contradecir todas las decisiones adoptadas dentro del proceso penal de adolescentes?

Si ()

No ()

No sé ()

14. ¿Sabe usted que recursos puede interponer la parte ofendida y el Fiscal de Adolescentes dentro del proceso penal de adolescentes?

Si ()

No ()

No sé ()

15. ¿Considera usted que dentro del Proceso Penal de Adolescente existe plena vigencia del principio de contradicción, para todos los actores del mismo?

Si ()

No ()

No sé ()